

LA POLÍTICA EXTERIOR CHILENA: LA CRISIS CONTINÚA

HERALDO MUÑOZ

DURANTE EL AÑO 1984, la política exterior chilena, al igual que en años anteriores, siguió enfrentando serias dificultades tanto de carácter político como económico. Al ya tradicional tema del aislamiento político internacional del gobierno militar chileno —producto de la inevitable proyección en el plano externo de medidas autoritarias en el ámbito interno— se sumó el ahondamiento de la crisis de la deuda externa, además de diversos problemas de comercio e inversión extranjera.

El manejo de la política exterior, durante el lapso que aquí se analiza, se distinguió por una creciente descoordinación, observándose también un fortalecimiento significativo de lo que denominamos el estilo “pretoriano-ideológico” de diplomacia. En buena medida la gestión del canciller Jaime del Valle durante 1984 fue el reflejo de los objetivos políticos internos más inmediatos del régimen militar, lo cual significó una clara declinación de la presencia específica del Ministerio de Relaciones Exteriores en la labor gubernamental, y la casi total ausencia de los factores y criterios internacionales en los procesos de toma de decisiones.

Con todo, durante ese año hubo un logro internacional de gran trascendencia que fue la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, en el marco de la mediación del Vaticano, cuya ratificación en ambos países se esperaba para los primeros meses de 1985. Estos y otros temas se analizan en detalle en las páginas que siguen.

CANCILLERÍA Y ESTILO DE DIPLOMACIA

Desde que asumió Jaime del Valle el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en lugar de Miguel Schweitzer hacia fines de 1983,¹ la política exterior chilena se ha transformado en un instrumento al servicio exclusivo de la política interna del gobierno militar. La actitud pasiva del canciller Del Valle frente

¹ Al asumir Del Valle el puesto de canciller quedó en evidencia la falta de continuidad en la conducción de la política exterior chilena, puesto que en 1983 ocuparon dicha cartera René Rojas, Miguel Schweitzer y Jaime del Valle.

a hechos internos que afectan significativamente la posición internacional de Chile, y su discurso agresivo, han contribuido a fortalecer el “estilo pretoriano-ideológico”² en la conducción de las relaciones exteriores del país.

En la línea antes señalada, una de las primeras iniciativas del nuevo Canciller fue anunciar que el gobierno chileno estaba estudiando el apoyo económico que brinda el gobierno de Suecia a organismos que trabajan “en pro de un desarrollo democrático en Chile”, calificando dicha cooperación económica como un “asunto delicado”.³ Pese a que diversas entidades no gubernamentales en Chile reciben ayuda similar de países como Alemania Federal y Estados Unidos, el propósito de resaltar la presencia sueca en esta materia había sido crear la imagen de una injerencia indebida en los asuntos internos de Chile, por parte de un gobierno que tradicionalmente ha criticado la situación de los derechos humanos en el país, y la idea de organismos disidentes subordinados a políticas extranjeras por la vía del financiamiento.

Posteriormente, en otro plano, el ministro Del Valle expuso su visión de diplomático, cuestionando la relativa independencia del funcionario de carrera —leal fundamentalmente al Estado-Nación más que al régimen político en turno— y sosteniendo que “la lealtad debe ser total para con su gobierno, así como para con las autoridades que representa, además de ser también fundamental la que debe guardar para con sus colegas de labores”.⁴

Sin embargo, una expresión más clara de la gestión de Del Valle fue una declaración que éste formuló en mayo de 1984: “La realidad chilena es deformada sistemáticamente, y no podemos dejar de tomar ciertas actitudes o adoptar medidas que sean necesarias para salvar esa imagen exterior. Ello sería un error, y el día que una nación, Chile por ejemplo, comience a actuar y legislar en función de una mejor percepción internacional, quiere decir que habría destruido totalmente su alma nacional”. Luego Del Valle agregó en forma tajante: “Si en un momento determinado se decide expulsar del país a una persona cuya presencia causa grave daño, creo que esa medida hay que adoptarla, aunque perjudique la forma en que nos ven. Es decir, *lo primero que hay que resguardar es la paz y la seguridad internas, y si eso trae consecuencias en el ámbito internacional hay que lamentarlo y tratar de explicar los fundamentos tomados en cuenta.*”⁵

En un tenor similar, el ministro sostuvo, poco tiempo después, que él no era un “canciller llorón” que andaba constantemente solicitando al Jefe de Estado o al Ministro del Interior cambios o suspensión de medidas que pudieran afectar negativamente la posición internacional de Chile. En las palabras de Del Valle:

Yo podría decir: Mire Presidente, no tome esta medida, que me va a perjudicar. Tome esta otra. Pero no. Yo tengo que pensar que ellos están tomando las

² Este estilo contrasta con el estilo “civil-pragmático” que históricamente caracterizó a la conducción de la política exterior chilena.

³ Ver *El Mercurio*, 9 de febrero de 1984, p. C1.

⁴ Del Valle, citado en *La Tercera*, 5 de junio de 1984, p. 5.

⁵ Declaraciones citadas en *El Mercurio*, 18 de mayo de 1984, p. C3. El subrayado es nuestro.

medidas mejores para llevar bien el orden interno del país. Yo no puedo estar diciendo: Mire en este momento, por favor, no me destinen a Futaleufú a este señor, porque van a venir los embajadores a preguntar. Si ellos lo necesitan para seguridad interna, lo hacen. Entonces yo no soy un Canciller llorón, que le está pidiendo todo el tiempo al Ministro del Interior: no hagas esto, no hagas lo otro, porque me perjudica.⁶

La actitud de otorgar prioridad absoluta a la política interna en el manejo de la diplomacia chilena volvió a quedar en evidencia en ocasión de la violenta represión de la protesta y paro nacional de los días 29 y 30 de octubre de 1984, situación que originó diversas expresiones de malestar y preocupación por parte de varios gobiernos extranjeros. No obstante, la Cancillería emitió una declaración oficial, el 2 de noviembre, comunicando que “el gobierno de Chile no aceptará ningún tipo de nota de ‘protesta’ o ‘manifestación de malestar’ en todo lo referente a sucesos de la política interna”.⁷ En una expresión típica del estilo pretoriano-ideológico la declaración agregaba:

El gobierno de Chile rechaza terminantemente que su situación política y económica pueda ser utilizada por otras naciones, que viven circunstancias mucho más difíciles, para atender sus problemas de orden interno, con alardes verbalistas destinados a satisfacer a los partidarios marxistas de su propio espectro político.⁸

El comunicado concluía advirtiendo severamente a entidades y personas en Chile que supuestamente estaban enviando informaciones distorsionadas al exterior, guiados por “razones de pasión política”.

La virtual ausencia de lo internacional en la política exterior bajo el ministro Del Valle se reflejó nuevamente en la prohibición de reingreso a Chile del Vicario de la Solidaridad, el sacerdote español Ignacio Gutiérrez, el día 7 de noviembre, y en la justificación de la medida realizada por el propio Canciller. Éste sostuvo que la opinión pública chilena “quiere ver a los sacerdotes en su ministerio y no haciendo política”,⁹ y agregó, desestimando las repercusiones internacionales de la medida: “no podemos seguir pensando que todo lo que se haga en Chile va a caer bien o va a caer mal. Nosotros hacemos aquí lo que nos conviene como país, y si acaso, para la seguridad interior del Estado, se debe tomar una medida, se toma. Ahora, si a los países extranjeros no les parece bien, quedará dentro del fuero de ellos, porque tampoco les vamos a aceptar reclamos”.¹⁰ Consecuentemente, la protesta de la embajada de España, por la prohibición de ingreso a Chile del sacerdote Gutiérrez, fue rechazada

⁶ Declaraciones citadas en *La Tercera*, 15 de agosto de 1984, p. 14.

⁷ Declaración publicada en *El Mercurio*, 3 de noviembre de 1984, p. C3.

⁸ *Loc. cit.*

⁹ Citado en *Las Últimas Noticias*, 8 de noviembre de 1984, p. 13.

¹⁰ Citado en *El Mercurio*, 8 de noviembre de 1984, p. C4.

Del Valle en otra oportunidad señaló: “Traicionaríamos la voluntad del pueblo si reguláramos nuestra vida interna para dar gusto a nuestras relaciones internacionales” (*El Mercurio*, 13 de mayo de 1984, p. A1).

por la Cancillería chilena bajo el razonamiento de que el afectado había infringido “disposiciones de la ley de extranjería”.¹¹

El estilo pretoriano-ideológico se ha expresado con particular virulencia en el ámbito de los organismos internacionales donde el gobierno militar ha sido constantemente criticado por violar los derechos humanos de los chilenos. Recientemente, por ejemplo, el discurso del embajador ante la ONU, Pedro Daza, respecto a la resolución acusatoria contra Chile de la Asamblea General contiene un ataque directo a dicha Asamblea por mantener un silencio “culpable y cínico” frente a las violaciones de derechos humanos en otras partes del mundo,¹² rechaza la resolución por ser “ornelliana” en tanto “desconoce el esfuerzo institucional y el propósito definitivamente democrático en que [Chile] está empeñado”, y condena a los países de Europa Occidental por aprobar dicha resolución sólo por “propósitos políticos internos”.¹³

Pasando a otro aspecto, poco después de asumir su alto puesto, el canciller Del Valle anunció que se apoyaría durante su gestión en el Comité Asesor del Ministro, integrado tanto por diplomáticos de carrera como por militares asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores.¹⁴ Muy pronto, sin embargo, quedó en evidencia la escasa influencia de este Comité, y particularmente del personal de carrera, en la toma de decisiones en política exterior. Un incidente ilustrativo a este respecto, pese a las consideraciones personales involucradas, fue la renuncia pública a su cargo del embajador de carrera José Miguel Barros. Barros, un diplomático de vasta experiencia, se encontraba relegado al cargo de presidente de la Comisión Chilena Preparatoria de los Festejos del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, función que cumplía en su residencia particular, al no haberle sido asignada una oficina o asistencia secretarial en la Cancillería.¹⁵ El diplomático finalmente explicó que su alejamiento del Ministerio se debía a razones de “dignidad e incompatibilidad”.¹⁶

Más tarde el ex-embajador Barro señaló que había sido “herido por el gobierno, por su actitud, que es un atentado contra la carrera”, y prosiguió: “¡Se habla de respeto al profesionalismo y se trata en esta forma a los profesionales! O hay una profunda incoherencia, o una gran falsía”. Finalmente, criticando la excesiva participación militar en la diplomacia, Barros concluyó:

La cancillería chilena es la única donde el diplomático profesional más alto ocupa el cuarto lugar jerárquico. Hay un ministro que no es de carrera; un vice-

¹¹ Ver declaración de un vocero de la cancillería chilena en *El Mercurio*, 1 de noviembre de 1984, p. C3.

¹² Este punto acerca de la supuesta “discriminación” contra Chile contrasta con la realidad de la aprobación, por ejemplo, de la resolución de la Asamblea General de noviembre de 1983, coauspicada por Chile, que condenó a la URSS por la ocupación de Afganistán, por un margen de 116 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones (*El Mercurio*, 26 de noviembre de 1983, p. C3).

¹³ Ver discurso citado en *La Tercera*, 18 de diciembre de 1984, p. 12.

¹⁴ Entre los militares en el Comité Asesor figuraban el vicescanciller teniente general Sergio Covarrubias; el subsecretario, teniente coronel Humberto Julio, y el embajador especial, mayor general Enrique Morel.

¹⁵ Ver *La Tercera*, 18 de abril de 1984, p. 4.

¹⁶ *Loc. cit.*

ministro que es un general del ejército, y un teniente coronel que es el subsecretario. En cuarto lugar viene un diplomático profesional. Agréguele a eso el número de embajadores que no son de carrera, y el número de otros diplomáticos que no son de la carrera, y verá que ahí hay un remezón que vale la pena revelar.¹⁷

Lo anterior apunta hacia dos situaciones —estrechamente vinculadas con la reafirmación del estilo pretoriano-ideológico bajo la Cancillería de Del Valle— que conviene destacar: primero, la persistencia durante 1984 de la tensión entre funcionarios de carrera y militares en la Cancillería y, segundo, la creciente injerencia de otros ministerios —como es el caso del Ministerio del Interior— en materia de política exterior, a través de pronunciamientos públicos, declaraciones y toma de posiciones, situación que ha tendido a crear una sensación de que la Cancillería no ejerce control pleno sobre los temas propios de la cartera.

Respecto a la contradicción entre personal de carrera y militares habría que mencionar, además de lo ya indicado, la indiscutible influencia, por ejemplo, del comandante Humberto Julio, subsecretario de Relaciones Exteriores, que ha acentuado la presencia castrense en la elaboración y conducción de la política exterior, a la vez que ha tendido a subrayar el conflicto entre los estilos pretoriano-ideológico y civil-pragmático. El propio Julio reflejó la existencia de esta tensión en una entrevista en la que sostuvo lo siguiente acerca de los diplomáticos profesionales:

En los pocos años que llevo he observado que quienes son del sistema tienen muchos compromisos. Es humano, y si lo exagero diré más: están llenos de compromisos con personas, con amistades, que los limitan incluso en la toma de decisiones no digo ya de política exterior, sino en el manejo mismo de un ministerio. [. . .] Es más fácil para quienes están fuera del sistema adoptar muchas decisiones que afectan a personas, sin sentirse comprometidos con ellas.¹⁸

El ascenso a la Subsecretaría del comandante Julio —quien cuenta con acceso directo a las más altas esferas del gobierno— desde su antiguo cargo de Director de la Dirección de Planificación (DIPLAN) de la Cancillería, organismo de estudio en el que los funcionarios de carrera son escasos, constituye según opiniones vertidas privadamente por diplomáticos profesionales, la más clara evidencia del predominio de la lógica castrense en la diplomacia chilena.

Por otra parte, se ha hecho casi una costumbre durante 1984 que el Ministro del Interior, u otro ministro, responda a planteamientos oficiales de países extranjeros o emita juicios respecto a materias claramente de la competencia del Canciller. Así, por ejemplo, en febrero de 1984, el Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, expresó en una conferencia de prensa que una solicitud del gobierno de Israel, apoyada por varios países de Europa Occidental, para extraditar al criminal nazi Walter Rauff, entonces residente en Chile, era

¹⁷ Declaraciones de J.M. Barros en entrevista a *Cosas*, núm. 203, 12 de julio de 1984, p. 28.

¹⁸ H. Julio en entrevista a *Qué Pasa*, 19-25 de julio de 1984, p. 45.

“típicamente una maniobra política en contra del gobierno de Chile; es una maniobra absolutamente organizada desde fuera. Hay una campaña de prensa internacional que no sólo está teniendo vigencia y está siendo impulsada en países con gobiernos de extrema izquierda sino que también dentro de Estados Unidos”.¹⁹ Esta declaración obligó al embajador de Israel en Chile a expresar que su gobierno no participaba en ninguna campaña internacional en contra de Chile basada en el caso Rauff, y que el Estado de Israel tenía un “enfoque serio del asunto, limitado al plano de las relaciones bilaterales con Chile que eran, son y continuarán siendo amistosas”.²⁰

En la misma ocasión, el ministro Jarpa se refirió a unas declaraciones del Secretario de Estado norteamericano George Shultz en el sentido de que Chile “desentonaba” con el fervor democrático latinoamericano. El Ministro del Interior sostuvo al respecto: “No hay que guiarse por personas que no conocen a Chile, ni la realidad chilena, puesto que gran parte de los problemas que tuvimos entre los años 60 y 70 fue por escuchar recomendaciones extranjeras. [. . .] Sería mucho mejor que esos personeros se dedicaran a resolver sus propios problemas”.²¹

Varios meses más tarde, en noviembre, el ministro Jarpa volvió a expresar la opinión del gobierno chileno respecto a un planteamiento del Departamento de Estado norteamericano, referente al interés de Estados Unidos en un diálogo entre oposición y gobierno en Chile y en una transición hacia una democracia estable. En esta oportunidad Jarpa emitió juicios similares a aquéllos de febrero: “Creo que los extranjeros debieran preocuparse de sus cosas y no estar dándonos lecciones porque nadie nos ayuda a superar los problemas que tenemos”. Añadió que era “muy fácil criticar desde afuera”.²²

En el caso del asilo de cuatro militantes de izquierda en la Nunciatura Apostólica, en enero de 1984, se observó una casi secundaria participación de la Cancillería en un tema eminentemente de su competencia, y una descoordinación entre las distintas entidades de gobierno involucradas en el asunto. Para minimizar las confusiones Pinochet formó el 30 de enero una Comisión Triministerial (Interior, Justicia y Relaciones Exteriores) encargada de analizar el caso, y, pese a que el Canciller chileno le habría prometido al Nuncio una solución, el 6 de febrero la Comisión respondió que no se otorgarían los salvoconductos solicitados por la Santa Sede para los asilados.²³

Posteriormente vino una secuela de declaraciones gubernamentales contradictorias entre sí. El 11 de febrero el general Pinochet reiteró que no podía acceder a la petición del Papa, y dos días más tarde el canciller Del Valle sostuvo que ese era el “punto de vista oficial del gobierno. Es la palabra de S.E.”.²⁴ Pese a que la Comisión Triministerial continuó buscando soluciones

¹⁹ Jarpa, citado en *El Mercurio*, 21 de febrero de 1984, p. A1.

²⁰ Embajador de Israel citado en *El Mercurio*, 22 de febrero de 1984, p. C3.

²¹ Jarpa, citado en *El Mercurio*, 21 de febrero de 1984, p. A10.

²² Ministro Jarpa, citado en *El Mercurio*, 1 de noviembre de 1984, p. A1.

²³ Ver *Hoy*, 15-21 de febrero de 1984, p. 15.

²⁴ Citado en *Hoy*, 29 de febrero-6 de marzo de 1984, p. 12.

alternativas al problema, el 15 de febrero intervino el general Roberto Guillard, Intendente de Santiago, expresando que los refugiados debían ser “juzgados por la justicia chilena y no se les debía dar salvoconductos”.²⁵ Pese a todo lo anterior, el embajador de Chile ante el Vaticano sostuvo el 16 de febrero: “Yo no he pensado que se le haya dicho que sí o que no al Papa”.²⁶ Cuatro días después, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, quien reconoció haberse enterado del rechazo presidencial al otorgamiento de los salvoconductos por medio de la prensa, reiteró que la negativa a los salvoconductos era “oficial” y no cabía “ratificación por nota”.²⁷ Tres días más tarde, el 23 de febrero, el canciller Del Valle opinó: “El no del Presidente es un no de la oportunidad, de la ocasión, pero no una negativa absoluta y definitiva”.²⁸ Finalmente, luego de intervenciones en el caso por parte de varios miembros de la Junta de Gobierno y diversos ministros de Estado, el gobierno terminó otorgando los salvoconductos en cuestión el 6 de abril de 1984, tal como muchos observadores anticipaban desde un primer momento.

En virtud de las situaciones que se han descrito, la conducción de la política exterior chilena en 1984 fue objeto de múltiples críticas de fuentes académicas, políticas y periodísticas, además de comentarios adversos provenientes de diplomáticos retirados.

EL PROBLEMA DEL AISLAMIENTO Y EL EJEMPLO DEL CASO RAUFF

Una pregunta que ha provocado constante debate entre académicos, diplomáticos y políticos ha sido si el gobierno chileno se encuentra aislado o no de la comunidad internacional, a raíz de sus políticas autoritarias en el plano interno. Quienes desmienten la situación de aislamiento en que se encontraría el régimen sostienen que sólo existe “una campaña internacional de mentiras del marxismo soviético” tendiente a crear una imagen negativa del gobierno militar, y a aislarlo política y económicamente. En contraste, quienes aseguran que el gobierno chileno se halla aislado señalan, entre otros aspectos, las reiteradas condenas de organismos internacionales por la situación de los derechos humanos en el país, y las críticas provenientes de gobiernos y entidades occidentales que cubren el espectro político, desde socialistas hasta conservadores.

En 1984 los hechos apoyaban incuestionablemente la existencia efectiva de un aislamiento internacional del régimen militar.

Durante el año, el gobierno de Santiago fue condenado por diversos organismos internacionales públicos y privados, entre los cuales destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este último foro se aprobó nuevamente, en diciembre de 1984, una resolu-

²⁵ Citado en *El Mercurio*, 15 de febrero de 1984, p. A10.

²⁶ Citado en *Hoy*, 29 de febrero-6 de marzo de 1984, p. 12.

²⁷ Ver declaraciones del Subsecretario en *Hoy, ibid.*, pp. 12 y 15.

²⁸ Citado en *Hoy, ibid.*, p. 12.

ción auspiciada por trece países criticando el estado de los derechos humanos en Chile por 93 votos a favor, 11 en contra y 40 abstenciones. Como puede apreciarse en el cuadro, desde 1974 las repetidas condenas en contra del gobierno militar han sido aprobadas por márgenes similares de votación.

Cuadro 1

Votos condenatorios de la situación de los derechos humanos en Chile registrados en la ONU (1974-1984)

	A favor		En contra		Abstenciones		Total	%
		%		%		%		%
1974	90	72.6	8	6.4	26	21.0	124	100.0
1975	95	73.6	11	8.5	23	17.8	129	100.0
1976	95	71.9	12	9.0	25	18.9	132	100.0
1977	96	71.1	14	10.3	25	18.5	135	100.0
1978	96	68.1	7	5.0	38	27.0	141	100.0
1979	93	73.2	6	4.7	28	22.0	127	100.0
1980	95	66.9	8	5.6	39	27.4	142	100.0
1981	81	57.4	20	14.2	40	28.4	141	100.0
1982	85	59.4	17	11.9	41	28.7	143	100.0
1983	89	61.8	17	11.8	38	26.3	144	100.0
1984	93	66.4	11	7.8	40	28.5	140	100.0

Fuente: Recopilado por el autor, de diversas publicaciones.

Otro indicador, que en el pasado ha apoyado la tesis del aislamiento, ha sido el bajo número de jefes de Estado que han visitado el país en comparación con la tendencia histórica.²⁹ De hecho, desde la visita del entonces presidente de Brasil, Joao B. Figueiredo, en octubre de 1980, ningún primer mandatario extranjero ha visitado Chile; más aún, en julio de 1984 un informe oficial del gobierno anunció que durante el segundo semestre de 1984 llegarían a Chile dos jefes de Estado —el emir de Kuwait y el presidente de Paraguay—, ninguno de los cuales efectivamente visitó Chile en el período anunciado.³⁰

No obstante, la evidencia más clara de la situación de aislamiento político que ha debido enfrentar el gobierno chileno se registró durante los primeros meses de 1984, a raíz de la petición de Israel y otros países de extradición del ex-oficial nazi residente en Chile, Walter Rauff.

²⁹ Antecedentes detallados sobre este punto en Heraldo Muñoz, *Gobierno militar y política exterior chilena*, en prensa.

³⁰ El mismo informe anunciaba la visita de cuatro cancilleres (de Paraguay, Pakistán, Venezuela y Brasil), pero sólo dos de ellos, los de Paraguay y Brasil, concretaron sus visitas. (Ver informe citado en *El Mercurio*, 8 de julio de 1984, p. C2.) Las visitas del Emir de Kuwait y el presidente Stroessner de Paraguay fueron también anunciadas personalmente por el canciller Del Valle (ver *La Tercera*, 20 de junio de 1984, p. 8).

El tema del proceso del ex-oficial de la S.S. fue planteado inicialmente por el Viceministro de Relaciones Exteriores de Israel en noviembre de 1983, durante una visita oficial a ese país del entonces canciller chileno Miguel Schweitzer. En esa ocasión Schweitzer explicó que no era posible acceder a la solicitud de extradición israelí, puesto que existía una decisión definitiva al respecto por parte de la Corte Suprema de Chile.

En enero de 1984, Beate Klarsfeld, esposa de un conocido "cazador de nazis", visitó Chile y tomó contacto con diversos sectores políticos locales con el objeto de obtener apoyo para presionar por la expulsión de Rauff. En esos mismos días, el 25 de enero, el gobierno israelí solicitó formalmente la extradición de Rauff a través de su Ministro de Justicia Moshe Nissim. A fines de enero, la Unión de Congregaciones Hebreas de Estados Unidos pidió al Papa Juan Pablo II que se uniera a la solicitud de extradición planteada por Israel. No obstante, el gobierno chileno volvió a reiterar que la extradición había sido ya denegada en 1963 por la justicia chilena.

Israel entonces cambió de estrategia, y solicitó, el 1º de febrero de 1984, la *expulsión* de Rauff en vez de su extradición, teniendo presente que cualquier gobierno puede, en un acto político unilateral, expulsar de su territorio a personas indeseables, tal como había acontecido con la expulsión del nazi Klaus Barbie, de Bolivia. La trascendencia que Israel le atribuyó a este asunto quedó en evidencia con la visita de 24 horas a Chile que realizó el director de Asuntos Exteriores de Israel, David Kimche, para insistir en la expulsión.³¹ De ahí en adelante, diversos países y entidades se sumaron a la petición israelí y emplazaron al gobierno chileno a expulsar a Rauff.

A mediados de febrero, Ronald Reagan recibió en audiencia a Simón Wiesenthal, quien pidió al presidente su colaboración para presionar al gobierno chileno en el asunto Rauff. Dos semanas antes, el Departamento de Estado norteamericano había declarado que estaba dispuesto a prestar la asistencia necesaria para que se hiciese justicia en dicho caso, y que la posición de Estados Unidos era que "los criminales de guerra nazis deben ser sometidos a la justicia".³² Paralelamente, el Parlamento Europeo adoptó una resolución demandando que Chile expulsara a Rauff para que fuese juzgado en Europa.³³

Al mes siguiente Najum Schutz, Director de Relaciones Externas de la Organización Sionista Mundial, visitó Chile y abogó por la expulsión y enjuiciamiento de Rauff, argumentando que dicho enjuiciamiento se hacía necesario "como una cuestión de higiene internacional, para que el holocausto nunca se vuelva a repetir".³⁴ También durante el mes de marzo, la Primera Ministra británica, Margaret Thatcher, informó ante la Cámara de los Comunes que Chile se había negado a una solicitud de Israel para la extradición de Rauff, y que, en nombre del gobierno británico, había instruido al embajador en Chile

³¹ Ver *El Mercurio*, 2 de febrero de 1984, p. C3.

³² Ver declaraciones citadas en *El Mercurio*, 17 de febrero de 1984, p. C3.

³³ *El Mercurio*, 17 de febrero de 1984, p. C3.

³⁴ Citado en *La Tercera*, 15 de mayo de 1984, p. 4.

a apoyar la solicitud de los gobiernos de Alemania Federal y Estados Unidos respecto a la expulsión del ex-oficial nazi de territorio chileno.³⁵ Por esos mismos días, el Comité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó como una nueva condición para el levantamiento del embargo a la transferencia de armas a Chile la expulsión de Rauff. La respuesta del canciller Del Valle ante estas exigencias fue: "Pueden pedir todo lo que quieran, pero no nos van a presionar para adoptar una medida que no tiene ninguna razón de ser".³⁶

Durante la segunda semana de mayo, los embajadores de Francia y Alemania Federal se reunieron con el canciller chileno Jaime del Valle, para dar cumplimiento a una resolución del Parlamento Europeo en el sentido de insistir en la expulsión de Rauff sobre la base de que "en derecho los crímenes de guerra no prescriben".³⁷ El embajador germano agregó que Bonn consideraba que Chile tenía la posibilidad de expulsar a Rauff como una decisión política, entre otras razones, porque cuando éste solicitó su permiso para residir en el país no había mencionado su condición de criminal de guerra.³⁸

Como ya mencionamos, el régimen militar interpretó las múltiples peticiones por la extradición o expulsión de Rauff como una "campaña internacional", una "maniobra política en contra del gobierno de Chile", interpretación que fue enérgicamente rechazada, entre otros, por el gobierno de Israel. En todo caso, este serio problema en las relaciones exteriores de Chile concluyó abruptamente con el anuncio de la muerte de Walter Rauff en un hospital de Santiago, el 14 de mayo de 1984. Al día siguiente el canciller Del Valle informó que el gobierno había comprobado la identidad del fallecido ex-oficial nazi;³⁹ simultáneamente, la prensa comunicó que en esos mismos días el gobierno chileno había decidido rechazar la petición pendiente del Parlamento Europeo referente a la expulsión de Rauff del país.⁴⁰

LAS DELICADAS RELACIONES CON EL VATICANO

Durante 1984 se observó un claro deterioro de las relaciones entre el gobierno militar, por un lado, y el Vaticano y la Iglesia Católica chilena, por el otro. Las tensiones comenzaron en enero de 1984, cuando cuatro militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria buscados por las fuerzas de seguridad, penetraron en la Nunciatura Apostólica de Santiago en busca de refugio.

La Santa Sede otorgó el asilo a las cuatro personas e hizo la correspondiente petición de salvoconductos al gobierno. Con posterioridad a la concesión de asilo a los refugiados, el gobierno militar dictó órdenes para su detención

³⁵ Ver *El Mercurio*, 16 de marzo de 1984, pp. C1 y C2.

³⁶ Citado en *La Tercera*, 15 de mayo de 1984, p. 4.

³⁷ Ver *La Tercera*, 8 de mayo de 1984, p. 5.

³⁸ Ver *La Tercera*, 9 de mayo de 1984, p. 14.

³⁹ *El Mercurio*, 16 de mayo de 1984, p. C7.

⁴⁰ *La Tercera*, 15 de mayo de 1984, p. 4.

vinculándoles al asesinato del Intendente de Santiago (hecho ocurrido en agosto de 1983); sobre esta base el gobierno primero dilató una respuesta al Vaticano y, como ya explicamos en una sección anterior, luego expresó que por decisión del general Pinochet los salvoconductos no serían concedidos.

Ante el rechazo de la petición del Vaticano, el episcopado chileno emitió una declaración solidarizándose con el Nuncio, y criticando el proceder del gobierno en este caso. El documento del episcopado sostenía, entre otros puntos, que

calificar la condición de asilado corresponde exclusivamente a quien concede el asilo. En este caso, el juicio de la Santa Sede sobre los hechos y su decisión de otorgar asilo diplomático deben ser respetadas por el gobierno, en conformidad a una larga y no desmentida tradición de nuestra cancillería.[. . .] Este gobierno ha concedido salvoconductos a personas asiladas en otras embajadas, en circunstancias parecidas a las actuales, y lo ha hecho en repetidas oportunidades. ¿Por qué el Gobierno de Chile había de ser menos deferente con el Santo Padre que con los Jefes de Estado? Más aún cuando él ha recibido la promesa que le fue hecha directamente de que el pedido de salvoconductos sería examinado con la máxima solicitud y benevolencia.⁴¹

La cancillería chilena respondió entonces con un comunicado en que señalaba que no existía “tratado alguno que obligue al gobierno de Chile a otorgar las referidas autorizaciones”⁴² para que los asilados abandonasen el país.

El 24 de febrero, el Nuncio Apostólico se entrevistó con el canciller Del Valle para reiterarle la petición de salvoconductos para los cuatro refugiados, y expresó que constituía “una falta de cortesía hacia el Santo Padre” que el gobierno chileno no hubiese acogido dicha solicitud, agregando que con cada día que pasaba “se agrava la falta de cortesía”;⁴³ en esa misma oportunidad el representante papal expresó con tono severo: “Hasta ayer el Papa era el Augusto Mediador, el Vicario de Cristo en la Tierra, la más alta autoridad del mundo, y hoy es como un eclesiástico más que da una opinión.”⁴⁴

Para subrayar su preocupación respecto a lo que sucedía en Chile, el Vaticano envió desde Roma a un representante especial, monseñor Claudio Celli, para negociar la obtención de los salvoconductos. Finalmente, el 6 de abril el gobierno otorgó las autorizaciones de salida solicitadas, y los refugiados viajaron, dos de ellos a Ecuador y a Bélgica los dos restantes. Pocas semanas después, como una especie de “coletazo” del caso de la Nunciatura, la Iglesia

⁴¹ Ver transcripción aparecida en *El Mercurio*, 15 de febrero de 1984, p. A10.

⁴² Declaración citada en *El Mercurio*, 15 de febrero de 1984, p. A1.

⁴³ Citado en *El Mercurio*, 25 de febrero de 1984, p. A1.

⁴⁴ Declaraciones citadas en *Hoy*, 29 de febrero-6 de marzo de 1984, p. 11. Respecto al caso de los salvoconductos, el almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta de Gobierno, llegó a decir que “el Papa puede tener muy buenas intenciones. Sabemos que el Santo Padre es infalible en todo lo divino, pero es falible en lo humano” (citado en *Hoy*, 29 de febrero-6 de marzo de 1984, p. 11).

chilena estampó un reclamo formal ante la cancillería debido a un artículo escrito por un columnista vinculado al gobierno, en el que se atacaba la gestión del Nuncio Apostólico y se sugería que su presencia en Chile era “no grata”.⁴⁵ El canciller lamentó los términos de la columna en cuestión.

Con todo, el tema que ha provocado mayores y continuos roces entre el gobierno chileno y el Vaticano ha sido el respeto a los derechos humanos y el retorno a la democracia en Chile. En abril de 1984, el Papa alentó al arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno, a proseguir la búsqueda del diálogo entre gobierno y oposición, descartando que éste pudiese constituir “intromisión en política” por parte de la Iglesia.⁴⁶ Según el Arzobispo, citado en el periódico *Paese Sera*, lo importante en Chile “es fijar cuándo se regresará a la democracia [. . .] Los plazos no pueden ser postergados eternamente. No, por cierto, hasta 1989 como prevé la cláusula extraordinaria de la Constitución”.⁴⁷

En atención a los pronunciamientos del Papa, el general Augusto Pinochet envió, en el mes de julio, una carta a Juan Pablo II en la que hacía referencia al más reciente llamado papal a “buscar respuestas positivas” para Chile y señalaba la intención gubernamental de emprender “pasos decisivos en la consolidación de la institucionalidad que anhela la gran mayoría de los chilenos”.⁴⁸ Más adelante, debido a la realización de nuevas protestas opositoras y a la represión desplegada para aplacarlas, el Pontífice ofreció una oración en la Plaza de San Pedro en que mencionó a las “víctimas de la violencia en Chile”.⁴⁹

El deterioro de las relaciones gobierno-Vaticano e Iglesia Católica se ahondó con la decisión gubernamental de impedir el reingreso a Chile del Vicario de la Solidaridad, el sacerdote español Ignacio Gutiérrez, mientras éste se encontraba en Europa. La medida del régimen, justificada con el argumento de que Gutiérrez había participado en una reunión en Roma con “dirigentes marxistas” exiliados y formulado declaraciones políticas en Estados Unidos, fue duramente condenada por la autoridad eclesiástica de Santiago; la declaración arzobispal expresaba que sólo al Arzobispo le correspondía “juzgar sobre la actitud del personal consagrado y el grado en que éste lo representa”, y agregaba lo siguiente: “El Sr. Arzobispo invoca su autoridad moral para pedir que esta medida sea revocada y deja en claro que los males que esta decisión acarree para la imagen del gobierno son de exclusiva responsabilidad de quienes la han tomado”.⁵⁰

La reunión sostenida en Roma entre varios obispos y sacerdotes, por una parte, y chilenos exiliados, por la otra, fue utilizada no sólo como un argu-

⁴⁵ Ver *El Mercurio*, 4 de mayo de 1984, p. C4.

⁴⁶ Ver *La Tercera*, 13 de abril de 1984, p. 17.

⁴⁷ Entrevista citada en *La Tercera*, *ibid.*

⁴⁸ Carta citada en *El Mercurio*, 31 de julio de 1984, p. A12.

⁴⁹ Ver *El Mercurio*, 2 de noviembre de 1984, p. A1.

⁵⁰ Declaración citada en *La Tercera*, 8 de noviembre de 1984, p. 7. La medida en contra del sacerdote Gutiérrez, también originó una enérgica nota de protesta por parte del gobierno español.

mento para justificar la prohibición de reingreso en contra del vicario Gutiérrez, sino que, además, fue mencionada por el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, como una causa clave de la renuncia a su cargo efectuada, y posteriormente rechazada por Pinochet, en noviembre de 1984. De ahí que el Presidente de la Conferencia Episcopal aclarara la naturaleza de la reunión de Roma, señalando que la Conferencia Episcopal de Chile “tiene establecido un servicio pastoral para los exiliados de Europa”, que a este tipo de encuentros asisten “militantes y aun dirigentes de diversos partidos, incluso marxistas”, y que la reunión había sido “aprobada por la Asamblea Plenaria de los obispos y participó en ella un delegado del Cardenal Vicario de Roma”.⁵¹ Posteriormente, el Comité Permanente del Episcopado emitió un comunicado, fechado 16 de noviembre, en el que se reafirmaba el “carácter pastoral” de la entrevista con los exiliados y se manifestaba “extrañeza” por el “escándalo” de las autoridades porque los obispos chilenos acogían en un encuentro pastoral a dirigentes políticos marxistas “cuando, en esos mismos días, otro ministro chileno (el canciller Jaime del Valle) hacía una visita amistosa en nombre del gobierno de Chile, a un país y a un gobierno marxista (China Popular)”.⁵²

En este contexto, el Papa Juan Pablo II volvió a referirse públicamente a la situación chilena el 8 de noviembre y, sin hacer mención expresa a la prohibición en contra del vicario Gutiérrez, manifestó su preocupación por “las acrecentadas tensiones y dificultades de estos últimos días, que causan malestar, sufrimientos y lutos en esa nación sudamericana”, abogando también por la superación de “las divisiones y los enfrentamientos, a fin de que todos sepan colaborar sinceramente en la construcción del bien común, la paz social, la justicia, el respeto por la vida y por todos los derechos humanos”.⁵³

Pocos días más tarde, el 18 de noviembre, el Papa volvió a referirse públicamente al caso chileno, señalando que sentía ansiedad acerca de lo que sucedía en Chile “desde donde siguen llegando noticias que preocupan”; en esa oportunidad el Sumo Pontífice agregó: “En el recuerdo de las nobles tradiciones de la vida democrática y de empeño cristiano que caracterizan su historia, hago votos para que puedan volver a Chile la serenidad, la concordia y la paz, tal como aspiran en común todos sus ciudadanos.”⁵⁴

La crisis más reciente entre las autoridades chilenas y la Iglesia se produjo a fines de diciembre de 1984, cuando dos sacerdotes extranjeros y dos religiosos fueron detenidos por la policía chilena, acusados de distribuir —según fuentes oficiales— “una tarjeta navideña de contenido subversivo”.⁵⁵ El gobierno procedió a expulsar del país a uno de los sacerdotes, el norteamericano Denis O'Mara, y entregó el resto de los religiosos al Nuncio Apostólico. El Arzobispo de Santiago pidió a las autoridades reconsiderar la medida de ex-

⁵¹ Declaración de monseñor Piñera en *El Mercurio*, 6 de noviembre de 1984, pp. A1 y A12.

⁵² Conferencia Episcopal de Chile, *Carta a los católicos de Chile*, mimeo., ref. núm. 731-78, 16 de noviembre de 1984, p. 1.

⁵³ Declaraciones citadas en *La Tercera*, 9 de noviembre de 1984, p. 16.

⁵⁴ Declaraciones citadas en *La Tercera*, 19 de noviembre de 1984, p. 19.

⁵⁵ Ver declaración del gobierno en *La Tercera*, 28 de diciembre de 1984, p. 14.

pulsión contra el sacerdote estadounidense, pero dicha petición fue denegada; un comunicado del Secretario General de Gobierno calificó la expulsión como “plenamente ajustada a derecho y sin posibilidades de revisión”.⁵⁶

Por último, el deteriorado estado de las relaciones entre el gobierno militar y el Vaticano quedó en evidencia cuando con ocasión de la firma en Roma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, en el marco de la mediación papal, el secretario de Estado del Vaticano, monseñor Agostino Casaroli, en audiencia separada, habría manifestado al canciller chileno que el Papa “no estaba dispuesto a emprender ningún viaje a Chile, en tanto el gobierno mantenga su actitud hostil hacia la Iglesia chilena”.⁵⁷ Esta información fue parcialmente ratificada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, quien el 7 de diciembre expresó que el Papa había instado nuevamente “a buscar el consenso, el diálogo entre los chilenos” y declarado que fijaría una fecha para viajar a Chile “pero no va a venir muy pronto”.⁵⁸

PROTESTAS, EXILIO Y EL DETERIORO DE LAS RELACIONES CON EUROPA

Las relaciones del gobierno chileno con los países de la Comunidad Europea se caracterizaron, durante 1984, por una casi permanente tensión, centrada en la situación de los derechos humanos, la transición a la democracia, y el tema del exilio chileno.

La Comunidad Económica Europea, como tal, emitió diversas declaraciones durante el año criticando las prácticas autoritarias del gobierno militar, aunque reiteradamente la cancillería chilena le negó toda competencia para opinar sobre los asuntos chilenos. Más aún, hacia fines de 1983, el gobierno chileno le impidió el ingreso al país al diputado europeo Gérard Israël, gaullista de Francia, portavoz del grupo de derechos humanos del Parlamento Europeo, aduciendo que Chile no aceptaría ninguna misión de investigación sobre la situación interna y tampoco admitiría la visita del diputado a título personal.⁵⁹

En el plano nacional, el gobierno italiano, por ejemplo, sacó en el curso de 1984 numerosas declaraciones abogando por la apertura democrática, el diálogo político, y el respeto de los derechos humanos en Chile. Una evaluación del encargado de negocios de Italia en Santiago resumió sucintamente el estado de las relaciones bilaterales, al sostener que “no [eran] plenas desde un punto de vista político, porque en Santiago no hay un embajador sino un encargado de negocios, y lo mismo hace Chile en Roma”.⁶⁰

Las relaciones entre los gobiernos de Suecia y Chile han estado plagadas de controversias desde septiembre de 1973. Como ya se mencionó en páginas anteriores, en febrero de 1984, la cancillería chilena comunicó al representante

⁵⁶ Citado en *La Tercera*, 2 de enero de 1985, p. 5.

⁵⁷ Ver *Excelsior*, México, 1 de diciembre de 1984, p. 2A.

⁵⁸ Monseñor Piñera, citado en *El Mercurio*, 7 de diciembre de 1984, p. C3.

⁵⁹ Ver *El Mercurio*, 17 de noviembre de 1983, p. A9.

⁶⁰ Citado en *El Mercurio*, 18 de mayo de 1984, p. C5.

diplomático sueco en Santiago que el envío de fondos a organismos no gubernamentales chilenos era considerado una "abierta e inaceptable injerencia en los asuntos internos" del país.⁶¹ El roce más reciente entre Santiago y Estocolmo aconteció en diciembre de 1984, a raíz del asilo en la sede diplomática escandinava de tres militantes de izquierda buscados por la policía. El gobierno sueco otorgó la calidad de refugiados a las tres personas, y rechazó una petición de los tribunales militares de entregarlos a la justicia o interrogarlos. Ya avanzado el mes de enero de 1985, el gobierno chileno tampoco había otorgado salvoconductos a los asilados.

De modo similar, los vínculos del gobierno chileno con países como Holanda, que han expresado repetidas veces su preocupación por los derechos humanos en Chile, no han sido precisamente cordiales. Así, por ejemplo, durante la ceremonia protocolar de presentación de cartas credenciales, el nuevo embajador del Reino de los Países Bajos expresó que las relaciones entre su país y Chile estaban "caracterizadas por una complejidad particular", a lo que el general Pinochet respondió que, efectivamente, dichas relaciones atravesaban por un período de complejidad particular pero debido a "una equivocada apreciación de la realidad chilena".⁶² En esos mismos días, el nuevo embajador holandés calificó las relaciones entre ambos países como "no malas", añadiendo que llegaba a continuar el trabajo de sus antecesores.⁶³

Incluso, los vínculos entre el gobierno chileno y Alemania Federal, que en el pasado se han mantenido en un mínimo nivel de cordialidad, aunque tampoco han estado exentos de tensiones, se han visto deteriorados, como lo demostró el clima originado a causa de la solicitud alemana de extradición o expulsión de Walter Rauff que el gobierno chileno rechazó. Otro incidente en las relaciones entre los dos países se generó, en abril de 1984, por la detención, lesiones y maltrato que sufrió la religiosa germana Doris Stahl a manos de fuerzas policiales chilenas; este hecho motivó una solicitud de investigación ante la cancillería por parte de la embajada alemana y, luego, una enérgica protesta del embajador ante declaraciones —después desmentidas— de la Segunda Fiscalía Militar, encargada de investigar el caso, que pretendían descalificar a la religiosa alemana.⁶⁴

El desarrollo de las protestas en contra del gobierno y la represión de éstas, por parte de las autoridades, figuraron como un tema central en las relaciones políticas entre Chile y Europa, sin excluir a otros países o regiones.

Ya a principios de marzo, incluso antes de que se realizara la primera jornada de protesta del año 1984, la situación de uno de los líderes sindicales de dichas manifestaciones populares preocupaba a un gobierno europeo. Efectivamente, en esos días el canciller de Austria solicitó a las autoridades chilenas que Rodolfo Seguel no fuese privado de su calidad de dirigente laboral, ante

⁶¹ Ver *El Mercurio*, 24 de febrero de 1984, p. C3.

⁶² Ver declaraciones en *La Segunda*, 29 de diciembre de 1983, p. 3.

⁶³ Ver declaraciones en *El Mercurio*, 28 de diciembre de 1983, p. C3.

⁶⁴ Sobre este caso ver *La Tercera*, 26 de abril de 1984, p. 5; *La Tercera*, 5 de abril de 1984, p. 4; *El Mercurio*, 28 de abril de 1984, p. C3.

lo cual el Ministro de Relaciones Exteriores chileno replicó que las actividades de Seguel estaban “orientadas a procurar la desestabilización del gobierno” y que el líder había sido inhabilitado como tal “por la Dirección del Trabajo con estricto apego a las normas legales”.⁶⁵

La temática del exilio pasó a un primer plano de las relaciones exteriores de Chile con la expulsión del país, en julio de 1984, de tres dirigentes de izquierda, quienes luego de ser embarcados a Buenos Aires y no desear acogerse al asilo en Argentina, fueron devueltos a Chile para, posteriormente, ser nuevamente expulsados por las autoridades chilenas, esta vez con destino a Colombia.

Posteriormente, a comienzos de septiembre de 1984, seis dirigentes políticos y sindicales chilenos intentaron regresar a Chile sin autorización, tras once años de exilio, hecho que causó gran conmoción nacional e internacional. Como se esperaba, las autoridades les impidieron violentamente el ingreso a territorio nacional y, vigilados por un fuerte contingente de policías, fueron reembarcados con rumbo a Buenos Aires. Una vez en Argentina los exiliados rehusaron el asilo y retornaron a Santiago donde, nuevamente, el gobierno los expulsó con destino a Bogotá.

Ante esta situación, el gobierno colombiano emitió diversas declaraciones expresando su inconformidad ante Chile, por la utilización de estos procedimientos inamistosos “al deportar contra su voluntad hacia Colombia a disidentes chilenos”.⁶⁶ Incluso, durante una escala técnica en Santiago en un viaje a Buenos Aires, el canciller de Colombia confirmó que su gobierno había expresado “molestia” ante el embajador chileno en Bogotá, por el caso de los seis exiliados y los tres deportados anteriores.⁶⁷

Paralelamente, y como una consecuencia inmediata del intento de retorno forzado de los seis exiliados, el gobierno entregó a las líneas aéreas una lista de alrededor de 4 900 personas que tenían prohibido su reingreso a Chile, con el objeto de que éstas no embarcaran a exiliados sin permiso de retorno.

El gobierno italiano, sin embargo, “invitó a la compañía aérea Alitalia a desestimar la lista de exiliados chilenos en la venta de pasajes y transporte de personas a Chile”.⁶⁸ Más aún, a fines de noviembre, un grupo de diputados italianos viajó acompañando a otros exiliados chilenos que intentaban regresar al país sin autorización; pero no sólo les fue impedido el ingreso a los desterrados sino que también a uno de los diputados, de filiación comunista, hecho que más tarde provocó una protesta formal contra el gobierno militar por parte del Senado italiano.⁶⁹

Frente al cuadro descrito, la actitud de la cancillería ha seguido siendo, exceptuando casos muy puntuales, la de rechazar o ignorar toda protesta o

⁶⁵ Ver *La Tercera*, 21 de marzo de 1984, p. 10.

⁶⁶ Ver *El Mercurio*, 10 de agosto de 1984, p. A11.

⁶⁷ Ver *La Tercera*, 13 de septiembre de 1984, p. 14.

⁶⁸ Ver *El Mercurio*, 26 de septiembre de 1984, p. A7.

⁶⁹ *La Tercera*, 30 de noviembre de 1984, p. A7. Cabe destacar que Alitalia transportó a los seis exiliados originales en su tercer intento —fallido— por ingresar a Chile en octubre de 1984.

exhortación al cambio proveniente tanto de países europeos como de otras naciones. Por otra parte, la cancillería chilena atribuye específicamente gran parte del deterioro de sus relaciones con Europa⁷⁰ a la “desinformación” y al papel que en este sentido desempeñarían los medios de comunicación del Viejo Continente. En las palabras del ministro Del Valle, en Europa “la gran mayoría está absolutamente desinformada. La televisión y los diarios mienten en forma realmente triste sobre lo que está pasando en nuestro país. Esa es la tónica general en Europa”.⁷¹

LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ESTADOS UNIDOS

El arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca, a comienzos de 1981, favoreció al gobierno chileno, y en una primera etapa las relaciones entre ambos gobiernos fueron estrechas y cálidas; pero, durante 1983 y particularmente 1984, dichos vínculos sufrieron un deterioro relativo importante. La razón principal del deterioro ha sido la falta de cooperación del régimen militar chileno, en cuanto a respetar los derechos humanos y promover una transición hacia la democracia, para que la Casa Blanca otorgue la certificación sobre los derechos humanos, requisito indispensable impuesto por el Congreso para la reanudación de las ventas de armas a Chile. Dada la naturaleza de la política interna norteamericana, aun cuando la administración Reagan no oculta sus afinidades ideológicas con el gobierno chileno, aquél tiene otras prioridades en América Latina y difícilmente puede jugarse por un país sudamericano que, a diferencia de la tendencia predominante en la zona, no muestra signos de apertura política.

El desarrollo de protestas nacionales organizadas por la oposición chilena en contra del gobierno militar, a partir de mayo de 1983, tuvo un impacto trascendente en las relaciones entre Santiago y Washington. De hecho, la brutal represión de las protestas por parte del régimen militar marcó el comienzo de un relativo alejamiento de Washington de su política de “diplomacia silenciosa”, lo que, a su vez, significó la aparición de pronunciamientos públicos de carácter crítico hacia el gobierno chileno.

Esta nueva actitud estadounidense de crítica pública hacia el régimen militar provocó la molestia de las autoridades chilenas. Así, el canciller chileno de la época, Miguel Schweitzer, opinó en noviembre de 1983 que le parecían “excesivos los 14 comunicados del Departamento de Estado en relación al diálogo y la transición democrática en Chile”, y que “en cierta medida [había en ello] un dejo de injerencia en los asuntos internos”.⁷²

⁷⁰ Es importante tener en cuenta que si bien las relaciones *políticas* entre el gobierno chileno y los países europeos se han deteriorado ostensiblemente, existe un interés tanto europeo como chileno de mantener buenas relaciones en el plano *económico*. De hecho, países como España, Francia y Alemania, que han criticado duramente al gobierno chileno por violar los derechos humanos y no avanzar hacia la democracia, mantienen activas relaciones comerciales con Chile.

⁷¹ Declaraciones en *El Mercurio*, 4 de diciembre de 1984, p. A12.

⁷² Citado en “Cronología: Relaciones Chile-Estados Unidos”, *Cono Sur*, vol. III, marzo-mayo de 1984, p. 18.

La demostración más evidente del deterioro de las relaciones Estados Unidos-Chile bajo la administración Reagan, aconteció en diciembre de 1983 cuando Washington otorgó la certificación a Argentina, en reconocimiento de sus avances hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, dene-gándosele a Chile. El vicepresidente George Bush declaró en esa oportunidad que se necesitaban progresos claros para entregarle la certificación a Chile y que a Estados Unidos le “encantaría ver progresos hacia elecciones libres en Chile, al igual que el desarrollo de sus intenciones democráticas”.⁷³

La tensión bilateral que provocó esta decisión, obligó al gobierno de Reagan a enviar al general Vernon Walters a entrevistarse, en dos ocasiones, con Pinochet para impedir un quiebre demasiado grave en los vínculos entre Santiago y Washington. Pero a fines de diciembre el secretario de Estado Asistente para Derechos Humanos explicó, en una carta dirigida al *Washington Post*, que Reagan no otorgaba la certificación a Chile puesto que éste no cumplía con los requisitos establecidos por la ley norteamericana, en el sentido de avanzar hacia un mejoramiento del estado de los derechos humanos.⁷⁴ Luego, en febrero de 1984, el propio Secretario de Estado George Shultz subrayó la posición anterior al sostener, en una conferencia en Boston, que Chile “desentona-ba” con el fervor democrático que se observaba de un extremo al otro de América Latina.⁷⁵

El tema de la transición a la democracia ha continuado siendo el centro de las divergencias entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos. En marzo de 1984, el embajador norteamericano en Santiago, James Theberge, comunicó que la Casa Blanca estimaba que el proceso de apertura política se había “estancado un poco”, y que esperaba que éste se reanudara para contar con “una transición auténtica hacia la democracia estable”.⁷⁶ En términos similares se expresó el encargado del Consejo de Planificación y jefe de una delegación del Departamento de Estado, durante una ronda de consultas bilaterales con funcionarios de la cancillería chilena efectuada a mediados de marzo de 1984. En esos mismos días, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos agregó una nueva enmienda a la legislación sobre ayuda militar y económica a Chile, según la cual se establece que en Chile debe imperar un gobierno civil, elegido democráticamente, para que se otorgue la certificación que permita reanudar las transferencias de armas.⁷⁷

En el mes de abril de 1984, se produjo un incidente importante en las relaciones entre Washington y Santiago, a raíz del rechazo por parte del gobierno de Reagan de la designación del diplomático Mario Barros como embajador chileno en Estados Unidos, debido a que éste fue subdirector, desde

⁷³ Citado en *ibid.*, p. 19.

⁷⁴ *Loc. cit.*

⁷⁵ Citado en “Cronología: Relaciones Chile-Estados Unidos”, *Cono Sur*, vol. III, núm. 2, junio-julio de 1984, p. 19.

⁷⁶ Citado en “Cronología: Relaciones Chile-Estados Unidos”, *Cono Sur*, vol. III, núm. 3, agosto-septiembre de 1984, p. 17.

⁷⁷ Ver *ibid.*, p. 17.

1948 a 1952, de una publicación considerada antisemita: *El Estanquero*. Un editorial del *New York Times* sacó el asunto a la luz pública señalando: "El régimen autoritario de Pinochet hizo una propuesta para embajador que era un insulto: Mario Barros van Buren, ex-editor de una revista antisemita. Arrogancia, más que designio, explica probablemente esta peculiar elección por un gobierno ya notorio por proteger al criminal nazi Walter Rauff".⁷⁸

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, comandante Humberto Julio, sostuvo al respecto que era absolutamente falso que Washington hubiese rechazado la nominación de Barros, pese a que se abstuvo de indicar si efectivamente había existido o no petición de beneplácito para el diplomático en cuestión.⁷⁹ Al día siguiente, sin embargo, el canciller Del Valle reconoció que el gobierno chileno había "retirado" una solicitud de beneplácito ante Estados Unidos para la designación de embajador en ese país a Mario Barros, sosteniendo que, en cierto sentido, era *literalmente* efectivo lo declarado por el subsecretario Julio, en cuanto a que el nombre de Barros no había sido "rechazado ni tácita ni explícitamente" por el gobierno de Reagan.⁸⁰ En mayo la cancillería chilena envió de embajador en Washington al ex-presidente del Banco Central de Chile, Hernán Felipe Errázuriz, un abogado sin experiencia diplomática alguna.

En vista de la situación descrita, no provocó mayor sorpresa la evaluación de las relaciones chileno-norteamericanas realizadas en mayo de 1984 por el canciller Jaime del Valle, en la que sostuvo que dichos lazos no estaban en un nivel óptimo debido a la influencia negativa en Estados Unidos de sectores laborales y de derechos humanos, así como de políticos demócratas izquierdistas.⁸¹ La tensión existente entre ambos gobiernos sólo se vio aliviada parcialmente, en septiembre de 1984, cuando la administración Reagan rechazó un dictamen de la Comisión Internacional de Comercio (ITC) de Estados Unidos, que recomendaba medidas en contra de las exportaciones de cobre chileno para proteger la industria cuprífera norteamericana. Con todo, luego de la protesta y el paro nacional de los días 29 y 30 de octubre de 1984, el Departamento de Estado volvió a expresar su preocupación por la "creciente violencia en Santiago y las restricciones civiles impuestas por el gobierno del presidente Augusto Pinochet", y reiteró su opinión en el sentido de que "el diálogo entre el gobierno y la oposición democrática es un paso esencial para revertir la tendencia hacia la polarización y para desarrollar el consenso interno esencial para la transición hacia la democracia".⁸² Por su parte el canciller Del Valle atribuyó escasa importancia a estos planteamientos del gobierno norteamericano, señalándolos como "declaraciones que se formulan en un período preeleccionario".⁸³

⁷⁸ *New York Times*, 20 de abril de 1984.

⁷⁹ Ver declaraciones en *La Tercera*, 24 de abril de 1984, p. 5.

⁸⁰ Ver *La Tercera*, 25 de abril de 1984, p. 14.

⁸¹ Citado en "Cronología: Relaciones Chile-Estados Unidos", *Cono Sur*, vol. III, núm. 4, octubre-noviembre de 1984, p. 18.

⁸² Vocero citado en *El Mercurio*, 31 de octubre de 1984, p. A12.

⁸³ Del Valle, citado en *La Tercera*, 1 de noviembre de 1984, p. 4.

Con posterioridad a la reelección de Reagan como presidente de Estados Unidos, a fines de noviembre, el Departamento de Estado insistió en manifestar su preocupación por la situación chilena y exhortó a plantear nuevas iniciativas que permitieran “abrir discusiones sobre calendario y procedimientos para devolver la democracia a Chile”.⁸⁴ Pocos días antes, el Departamento de Estado había cuestionado la decisión del gobierno militar del 6 de noviembre, de reimplantar el estado de sitio, sugiriendo que la “amenaza terrorista de izquierda” en Chile no tenía las dimensiones como para justificar una medida extrema como la del estado de sitio.⁸⁵

Durante los primeros días de diciembre el subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos, James Michael, visitó Chile y sostuvo conversaciones con autoridades del gobierno y representantes de la oposición, con quienes habría explorado, entre otros puntos, la posibilidad de que en Chile se instaurase un “congreso designado”, idea que fue rechazada tanto por fuentes oficiales como de la disidencia.⁸⁶ El representante estadounidense nuevamente reiteró el interés de Washington en el “restablecimiento de la democracia plena en Chile”, y en favor de la libertad de prensa.⁸⁷ Dos semanas más tarde, una delegación de congresistas norteamericanos de origen hispano visitó Santiago y sostuvo una larga y agitada entrevista con el general Pinochet, en la cual solicitó que el gobierno chileno llamara a un plebiscito para formar un congreso, redujera la censura de prensa, levantara el estado de sitio, y permitiera la existencia de sindicatos libres. Pinochet les respondió, sin embargo, que dichas materias eran asuntos internos de Chile y rechazó la totalidad de las peticiones de los congresistas.⁸⁸

La crítica norteamericana más significativa del período a la situación imperante en Chile provino de un discurso del propio presidente Reagan, con ocasión de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1984. En ese discurso Reagan condenó las violaciones a los derechos humanos en la Unión Soviética, Irán, África del Sur y otros países y, refiriéndose a América Latina, criticó específicamente “la falta de progreso hacia un gobierno democrático en Chile”.⁸⁹

A fines de diciembre de 1984, resultaba claro que las relaciones entre Santiago y Washington se habían deteriorado respecto a los años 1981 y 1982 de la primera administración Reagan, y que éste sentía malestar por la resistencia del régimen militar chileno a las exhortaciones estadounidenses en favor de una

⁸⁴ Ver *El Mercurio*, 29 de noviembre de 1984, p. A6.

⁸⁵ Ver *El Mercurio*, 8 de noviembre de 1984, p. A9.

⁸⁶ Ver versión de la A.P. en *La Segunda*, 7 de diciembre de 1984, p. 5.

⁸⁷ Declaraciones en *El Mercurio*, 1 de diciembre de 1984, p. C3.

⁸⁸ Ver *La Tercera*, 15 de diciembre de 1984, p. 5, y *El Mercurio*, 19 de diciembre de 1984, p. A10. Según la versión del canciller Del Valle, dicho grupo de parlamentarios “no formuló petición concreta alguna”, y por lo tanto, de la conversación con Pinochet no podía “desprenderse que haya habido una intromisión en asuntos internos chilenos” (ver declaraciones en *El Mercurio*, 15 de diciembre de 1984, p. C3).

⁸⁹ Texto oficial del discurso de Ronald Reagan, Servicio de Cultura y Prensa de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, 18 de diciembre de 1984, p. 4.

transición democrática. Asimismo, parecía claro que había acontecido un debate al interior del aparato de toma de decisiones en política exterior, sobre si endurecer o no la actitud oficial de Washington hacia el gobierno chileno, prevaleciendo la postura benevolente y proclive al sostenimiento de las críticas públicas para no arriesgar un quiebre serio en las relaciones bilaterales. Esta postura quedó evidenciada en la decisión de Washington de votar, hacia fines de noviembre, en favor de un préstamo del BID a Chile, pese a señalar la "grave situación de los derechos humanos" existente en el país,⁹⁰ y en la decisión norteamericana de votar en contra de la resolución condenatoria de la situación de los derechos humanos en Chile en la Trigésima Asamblea General de la ONU en diciembre, pese a que en la argumentación de dicho voto el representante de Estados Unidos manifestó lo siguiente:

Debemos expresar nuestra profunda preocupación por el retroceso en las condiciones relativas a los derechos humanos [en Chile] durante el último año. Específicamente, deploramos la práctica de someter a las personas al exilio interno por motivos políticos; deploramos la abrogación a las libertades básicas y la dura represión bajo un estado de sitio [. . .] Instamos al gobierno de Chile a tomar medidas correctivas inmediatas, comenzando por levantar el estado de sitio. Hacemos un llamado por el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos y reiteramos nuestra opinión sobre la necesidad urgente de restablecer la democracia en Chile.⁹¹

LAS RELACIONES DE CHILE CON LOS PAÍSES LÍMITROFES

Durante 1984, como en años anteriores, las relaciones de Chile con sus vecinos tuvieron especial importancia. De hecho, el acontecimiento más trascendente y positivo en la política exterior chilena del año en cuestión fue el acuerdo de paz logrado en el marco de la mediación del Vaticano con el principal país limítrofe con Chile: Argentina.

Ya a mediados de 1983 se perfilaba la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Chile y Argentina sobre el diferendo austral centrado en la zona del Canal Beagle, que mantenían ambos países desde diciembre de 1915.⁹² Luego

⁹⁰ Ver *El Mercurio*, 30 de noviembre de 1984, p. A9. Diversos representantes del gobierno estadounidense se han expresado en favor de ayudar económicamente al gobierno militar, separando razones técnico-económicas de las argumentaciones políticas. Así se pronunciaron, por ejemplo, el subsecretario del Tesoro, Beryl Sprinkel, durante una visita a Chile en enero de 1984, y el presidente de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), en el curso de una visita a Chile en el mismo mes (ver *El Mercurio*, 17 de enero de 1984, pp. A1-A2 y C1).

⁹¹ Cita extraída de texto mimeografiado, embajada de Estados Unidos en Santiago, diciembre de 1984, p. 2.

⁹² Para una síntesis de los antecedentes históricos del diferendo entre Chile y Argentina sobre la zona del Beagle, ver Heraldo Muñoz, "Chile-Argentina: Dilemas del diferendo austral", *APSI*, Santiago, núm. 113, 17-30 de agosto de 1982, pp. 25-26. Para un análisis más detallado, ver Antonio Cavalla, *El conflicto del Beagle*, México, Casa de Chile, 1979, y Gloria Echeverría, "La controversia entre Chile y Argentina sobre la región del Beagle" en W. Sánchez y Teresa Pereira, *150 años de política exterior chilena*, Santiago, Editorial Universitaria, 1978.

de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de Argentina en diciembre de 1983, las negociaciones parecieron aproximarse a su fin. De hecho, en enero de 1984 un enviado especial del Presidente argentino declaró en Santiago que el diferendo quedaría resuelto en un plazo de 90 días. En definitiva, la Oficina de la Mediación Pontificia dio a conocer el texto del acuerdo final entre las partes el 4 de octubre de 1984, y, el 29 de noviembre del mismo año, se firmó en Roma el "Tratado de Paz y Amistad" entre los dos países, bajo la supervisión del Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Agostino Casaroli.

El Tratado estableció la delimitación de los espacios marítimos en la zona austral, fijó el límite definitivo en la boca oriental del Estrecho de Magallanes y creó un sistema de solución de controversias que contempla al gobierno de la Confederación Suiza como árbitro de última instancia.⁹³ En Chile el Tratado fue, por lo general, acogido favorablemente por contribuir al afianzamiento de la paz entre las dos naciones. Pese a algunas críticas importantes a la conducción de las negociaciones con Argentina, a ciertos aspectos puntuales del Tratado estimados desventajosos para Chile —vistos como subproducto del aislamiento internacional del gobierno militar— los partidos Socialista, Demócratacristiano, y Radical dieron su apoyo a la firma del Tratado. Lo mismo hicieron el Partido Nacional, Humanista, Unión Nacional y otros, así como diversas personalidades políticas y expertos internacionales. La Marina chilena claramente se mostró insatisfecha con los términos del Tratado; pero, a fines de diciembre de 1984, se anticipaba que su representante en la Junta de Gobierno (órgano que actúa como Parlamento ratificador del Tratado) votaría por aprobarlo.

En Argentina, luego de un intenso debate nacional sobre el Tratado —en que Radicales y un sector del peronismo se pronunciaron en su favor, y otros peronistas y pequeños grupos nacionalistas en su contra o por la abstención—, el presidente Alfonsín sometió el Tratado a un referéndum popular el 25 de noviembre, siendo éste aprobado por una mayoría superior al 80%. Más tarde, el Parlamento argentino ratificó formal y definitivamente el instrumento en cuestión.

Una vez que fue comunicado el Acuerdo de Paz en octubre de 1984, se produjo una notable intensificación de los vínculos bilaterales entre Chile y Argentina, en los más diversos niveles. Entre otros ejemplos, se reanudaron los vuelos entre diversas ciudades chilenas y localidades argentinas tanto en la zona norte como en el sur; se firmaron acuerdos entre cámaras de comercio binacionales; se reanudaron las conversaciones a nivel de cancillerías sobre integración física, suspendidas desde 1977; se anunció la reactivación del proyecto de ferrocarril Lonquimay-Zapala; se dispuso aumentar los circuitos telefónicos entre los dos países; se intensificaron los estudios sobre complemen-

⁹³ El texto completo del Tratado apareció en un apartado especial de *El Mercurio*, 20 de octubre de 1984.

tación gasífera, y se firmaron actas entre ambas cancillerías para impulsar la cooperación regional.⁹⁴

Pese al notable mejoramiento de las relaciones entre Chile y Argentina a partir del anuncio del Tratado de Paz y Amistad, subsisten algunos roces de cierta significación. Así, por ejemplo, en julio de 1984, Buenos Aires envió un memorándum a Santiago reclamando por el comercio que se venía efectuando entre la austral ciudad chilena de Punta Arenas y las Islas Malvinas. Por su parte, el gobierno chileno respondió que seguía apoyando los reclamos de soberanía argentinos en las Malvinas, y que “no existe ni ha existido” intención de reanudar el comercio con el archipiélago del Atlántico Sur, y que “tomaría todas las medidas a su alcance con el objeto de disuadir a los particulares de que realicen cualquier actividad comercial con las islas Malvinas”.⁹⁵ Otra tensión bilateral se produjo en diciembre, cuando en Buenos Aires se informó que Chile había cedido el islote Diego Ramírez a Gran Bretaña para su utilización como base de sistemas misileros y de radares, noticia que fue desmentida enfáticamente por el Ministro de Defensa de Chile. En el mismo mes de diciembre, Gran Bretaña transfirió efectivamente una de sus bases en la Antártida a Chile, mediante un acuerdo suscrito en Londres, situación que provocó duras críticas por parte de sectores nacionalistas argentinos.⁹⁶

Las relaciones de Chile con Bolivia continuaron suspendidas durante 1984, desde el rompimiento formal por parte de La Paz en 1978, y sujetas a un alto grado de inestabilidad.

Contrariando la posición chilena tradicional, basada en el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia de 1904, el gobierno de La Paz logró durante varios años que la Organización de Estados Americanos declarara, con la oposición de Chile, de “interés hemisférico” el problema de la mediterraneidad boliviana. Sorprendentemente, en noviembre de 1983 la Asamblea General de la OEA aprobó, con el voto favorable de Chile, una resolución que decidía

exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno orientado a una normalidad de sus relaciones, tendiente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico, sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas.⁹⁷

En la gestación, negociación y aprobación de esta resolución, le correspondió un papel destacado al canciller de Colombia y a su representante en

⁹⁴ Ver *El Mercurio*, 30 de noviembre de 1984; *La Tercera*, 6 de diciembre de 1984, p. 15; *El Mercurio*, 9 de diciembre de 1984, p. C9, y *El Mercurio*, 11 de diciembre de 1984, p. C2.

⁹⁵ Declaración citada en *El Mercurio*, 15 de julio de 1984, p. A9. Ver, además, *La Tercera*, 14 de julio de 1984, p. 9.

⁹⁶ Ver *El Mercurio*, 10 de diciembre de 1984, p. A10.

⁹⁷ Ver punto 2 de la resolución en *El Mercurio*, 19 de noviembre de 1983, p. A15.

la OEA, reflejando el interés que por este tema había manifestado el presidente colombiano Belisario Betancur. Consecuentemente, el presidente Betancur envió un mensaje a los jefes de Estado de Chile y Bolivia ofreciendo a Bogotá como sede para un encuentro entre los cancilleres chileno y boliviano, tendiente a materializar el acuerdo de la OEA.⁹⁸

En suma, la resolución reconocía explícitamente la jurisdicción del organismo interamericano en un tema que tradicionalmente se había considerado de exclusiva competencia de Chile; reconocía la existencia de “derechos” de Bolivia respecto a una salida soberana al Océano Pacífico; y aceptaba el involucramiento, en una función de “buenos oficios”, de un tercer país (Colombia) en una materia de tratamiento bilateral. Respecto a los “considerandos” de la resolución —que hacían referencia a resoluciones previas de la OEA sobre la materia claramente favorables a La Paz— la representación chilena se abstuvo, a diferencia de años anteriores en que había votado en contra o se había retirado de la sala.

A partir de la aprobación de la resolución mencionada, se inició un lento y accidentado proceso de diálogo entre Chile y Bolivia. A fines de diciembre de 1983, Colombia, mediante una nota de su canciller Rodrigo Lloreda, insistió ante el gobierno chileno sobre la necesidad de realizar pronto la reunión de acercamiento con Bolivia, en Bogotá, aprovechando también para clarificar que la función colombiana se limitaría “a buscar oportunidades de diálogo y caminos de comprensión entre Chile y Bolivia, sin que esto signifique participación alguna de árbitro”.⁹⁹

En marzo de 1984 se realizaron “conversaciones preliminares y preparatorias” para el encuentro en Bogotá, entre los embajadores de ambos países ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.¹⁰⁰ Con ocasión de la conferencia de ministros de relaciones exteriores en Cartagena, Colombia, en el mes de junio, los cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron conjuntamente con el canciller colombiano, y llegaron “a la conclusión de que se podía verificar una primera reunión formal, en Bogotá, en el mes de septiembre”.¹⁰¹ Sin embargo, el proyectado encuentro de septiembre en Bogotá no se efectuó, pese a que los ministros de relaciones exteriores de los dos países volvieron a conversar informalmente en la Reunión de Cancilleres de Mar de Plata, Argentina, en septiembre.

Durante la 39 Asamblea General de la ONU, celebrada a inicios de octubre en Nueva York, el canciller Jaime del Valle de Chile y su colega boliviano

⁹⁸ Ver *La Segunda*, 19 de noviembre de 1983, p. 2.

⁹⁹ Nota citada en *El Mercurio*, 27 de diciembre de 1983, p. A1.

¹⁰⁰ También en marzo, el presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, condicionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile al “previo reconocimiento al derecho boliviano de recuperar una salida soberana y propia al Océano Pacífico” (ver declaraciones en *El Mercurio*, 24 de marzo de 1984, p. A11). Sobre la política exterior boliviana bajo Siles Zuazo y sus antecedentes históricos, ver Waltraud Morales, “La geopolítica de la política exterior de Bolivia”, *Documentos de Trabajo PROSPEL*, núm. 2, septiembre de 1984.

¹⁰¹ *La Tercera*, 26 de junio de 1984, p. 14.

Gustavo Fernández sostuvieron cuatro reuniones, la última de ellas con la asistencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, acerca de cuyo contenido y propósitos, entre los que se incluía el compromiso de iniciar el diálogo formal de Bogotá en un plazo de 90 días, se suscribiría un comunicado conjunto. Pero Del Valle decidió no firmar dicho comunicado luego de escuchar el discurso del canciller boliviano ante la Asamblea que, según aquél, contenía términos duros e incompatibles con la suscripción del mensaje conjunto. Al regresar a Santiago, Del Valle se entrevistó con el general Pinochet, quien resolvió *suspender* indefinidamente las conversaciones con Bolivia.¹⁰²

A fines de octubre, el ministro Del Valle anunció que dos embajadores especiales estaban recorriendo Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, para explicar ante las cancillerías de los diversos países las razones del fracaso de las conversaciones que se llevaban a cabo para alcanzar un entendimiento con Bolivia, misión que se había puesto en conocimiento del gobierno de Colombia. Asimismo, el canciller chileno informó que se estaba estudiando una solución para la aspiración boliviana de salida al mar, consistente en “un corredor dentro de otro corredor, [. . .] una fórmula en la cual no hay límites. Se logra en un punto de conjunción, que permite la circulación de Perú hacia Chile, por territorio chileno”.¹⁰³ Más tarde se reveló que esta fórmula había sido propuesta a Chile, por el entonces canciller de Perú, en el curso de la Asamblea General de la ONU, en octubre; pero el propio Del Valle desechó públicamente esta proposición hacia fines de noviembre.¹⁰⁴

A propósito de la celebración en Brasilia de la reunión anual de la Asamblea General de la OEA, en noviembre, el canciller Del Valle volvió a entrevistarse con su colega altiplánico para discutir las posibilidades de un reaceramiento chileno-boliviano. Por su parte, la Asamblea General aprobó una resolución expresando satisfacción porque Chile y Bolivia habían aceptado la invitación colombiana de reunirse en Bogotá en enero de 1985, para “resolver dificultades que los separan y en especial concertar una fórmula que dé a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico”.¹⁰⁵ Finalmente, en diciembre, Chile y Bolivia acordaron fijar el encuentro en Bogotá para los días 5 y 6 de febrero de 1985.¹⁰⁶ No obstante, durante los primeros días de enero de 1985 existían dudas acerca de la realización de la reunión de febrero en Bogotá, debido a la renuncia a su cargo del canciller boliviano Gustavo Fernández, a la existencia de opiniones disidentes en La Paz acerca de la conveniencia de llevar a cabo dicho encuentro, y a la resistencia chilena de considerar

¹⁰² Ver *La Tercera*, 4 de octubre de 1984, p. 5 y *El Mercurio*, 5 de octubre de 1984, p. C3. Para una opinión crítica de la suspensión de las conversaciones, ver Oscar Pinochet de la Barra “Escaramuzas chileno-bolivianas”, *La Tercera*, 8 de octubre de 1984, p. 2.

¹⁰³ Citado en *La Tercera*, 31 de octubre de 1984, p. 14.

¹⁰⁴ Ver *La Tercera*, 20 de noviembre de 1984, p. 4.

¹⁰⁵ Resolución citada en *El Mercurio*, 20 de noviembre de 1984, p. A3.

¹⁰⁶ Este anuncio fue hecho por el canciller chileno, su colega boliviano, y el nuevo cónsul de Bolivia en Santiago en distintas oportunidades. Ver *El Mercurio*, 8 de diciembre de 1984, p. C3, y 19 de diciembre de 1984, p. C6; *La Tercera*, 19 de diciembre de 1984, p. 5, y 24 de diciembre de 1984, p. 13.

la reunión como el inicio de las negociaciones de fondo.¹⁰⁷ De cualquier manera, si bien es posible que las relaciones entre Chile y Bolivia mejoren lentamente, resulta difícil que se llegue a un entendimiento definitivo en torno al problema marítimo de la nación altiplánica, puesto que Chile ha condicionado cualquier cesión de una faja territorial soberana con acceso al mar a un canje de territorio, posición que Bolivia no acepta, y que, en la medida en que involucre territorio antiguamente perteneciente a Perú, requiere además de la aprobación de este último país.

Las relaciones del gobierno chileno con Perú, durante 1984, fueron a diferencia de años anteriores, estables y cordiales. Superado ya el período en que el embajador chileno en Lima fue declarado "persona *non grata*" y los vínculos diplomáticos se vieron rebajados al nivel de "encargados de negocios", por una situación de supuesto espionaje chileno en Perú, los lazos bilaterales se han mantenido en un plano de normalidad. Las tensiones políticas han sido escasas, y las relaciones se han centrado en el ámbito económico-comercial, donde la Comisión Mixta chileno-peruana ha servido como un eficaz foro para la concertación de intereses entre ambos países. Justamente en una de estas reuniones, la Sexta COMICOOP celebrada en mayo, Perú sugirió la creación de "un mecanismo fronterizo de alto nivel, ágil y dotado de facultades decisorias" para resolver problemas de tránsito de personas y comercio entre los dos países.¹⁰⁸

Pese a lo anterior, aún persisten algunas áreas problemáticas en estas relaciones. El equilibrio militar entre las dos naciones ha seguido siendo un tema polémico, como quedó demostrado en una denuncia de un diario peruano, en febrero de 1984, en el sentido de que Chile estaba por adquirir misiles Pershing; esta información, pese a que no fue asumida por el gobierno peruano, obligó al Ministro de Defensa chileno, y al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, a realizar enérgicos desmentidos.¹⁰⁹

Las dificultades en el intercambio comercial, como la colocación por parte de Chile de sobretasas arancelarias a diversos productos peruanos, han sido un punto importante de discusión, particularmente en vista de que el comercio bilateral declinó, de casi 150 millones de dólares en 1981, a alrededor de 80 millones de dólares en 1983 y 1984.¹¹⁰ Uno de los sectores de interés, y a veces de conflicto, común entre Chile y Perú es el pesquero. Así, en abril ambos países acordaron adoptar una política conjunta para la defensa de la harina y el aceite de pescado, puesto que sumados los dos producen el 60% de los dos millones de toneladas de estos productos que se consumen mundialmente al año;¹¹¹ pero, por otra parte, en julio del mismo año se produjo un incidente por la detención de seis buques pesqueros peruanos, con 70 tripu-

¹⁰⁷ Ver *La Tercera*, 8 de enero de 1985, p. 5.

¹⁰⁸ Ver *El Mercurio*, 3 de mayo de 1984, p. C2.

¹⁰⁹ Ver *El Mercurio*, 23 de febrero de 1984, p. A8.

¹¹⁰ Ver *El Mercurio*, 3 de mayo de 1984, p. C2; para las cifras de 1984, ver Banco Central de Chile, *Indicadores de Comercio Exterior*, Santiago, octubre de 1984, pp. 1348 y 1368.

¹¹¹ Ver *El Mercurio*, 13 de abril de 1984, p. A9.

lantes a bordo, que ingresaron a aguas territoriales chilenas en busca de captura, y que posteriormente fueron liberados por la Comandancia en Jefe de la Armada de Chile —según declaración oficial— “como especial deferencia al gobierno de la República del Perú”.¹¹²

Las tensiones que se han registrado con los países vecinos en años recientes, la progresiva autonomía y el poder de las fuerzas armadas durante la última década, y la situación de aislamiento internacional que ha padecido el gobierno chileno —expresada, por ejemplo, en la suspensión del abastecimiento de material bélico norteamericano debido a la enmienda Kennedy— ha llevado al régimen militar a buscar nuevos abastecedores de armas, y a estimular la creación de una pequeña *industria bélica nacional* con cierta capacidad de autoabastecimiento y exportación.

Para el tema de la política exterior chilena, lo más destacable fue el crecimiento durante 1983 y 1984, de la industria bélica local y de las exportaciones de armas. La fabricación de este material bélico de aire, mar y tierra se realiza en distintas industrias de carácter estatal, mixto, y privado.¹¹³

La empresa ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica) de la Fuerza Aérea de Chile, que se fundó legalmente como entidad estatal en febrero de 1984, vende uno de los principales productos de exportación de la industria de armas nacional: el avión T-35 “Pillán”, armado en Chile mediante convenio con la firma Piper de Estados Unidos. En julio de 1984, se comunicó la venta de 40 de estos aviones a España, a cambio de la compra de 21 aviones CASA-101 españoles a ser ensamblados en Chile.¹¹⁴ La importancia que se le atribuye a la incipiente industria aeronáutica chilena se reflejó en la organización por parte de la Fuerza Aérea de la Tercera Feria Internacional del Aire (FIDA-84), que reunió en Santiago, en el mes de marzo, a 174 empresas de 19 países, incluyendo a Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España.

Sin duda, el armamento chileno que ha tenido más éxito internacional ha sido la bomba de racimo de 500, 130 y 150 libras. En 1984, la industria privada Cardoen S.A. —que recibe apoyo estatal vía contratos, del Ejército principalmente— vendió cinco mil de estas bombas a Irak, a un precio de 35 millones de dólares; buena parte de este cargamento fue recogido en Santiago por Iraqi Airways en marzo y luego en junio de 1984.¹¹⁵ Según un alto ejecutivo de la firma Cardoen, los armamentos se venden “a países cuya orientación es coincidente con la política exterior chilena”.¹¹⁶ No obstante, resulta revelador que la bomba de racimo tenga dos posibilidades distintas de enganche: una para aviones de la OTAN y otra para aeronaves del Pacto de Varsovia. De cualquier modo, entre los posibles países compradores anunciados por la propia empresa

¹¹² Declaración citada en *La Tercera*, 15 de julio de 1984, p. 15.

¹¹³ Para un análisis detallado de las compras de armas chilenas y de la fabricación de armas en Chile, ver Augusto Varas, “Militarización y defensa nacional en Chile”, *Mensaje*, núm. 329, junio de 1984, pp. 247-252.

¹¹⁴ Ver *El Mercurio*, 24 de julio de 1984, pp. A1 y A10.

¹¹⁵ Ver *La Tercera*, 22 de junio de 1984, p. 5.

¹¹⁶ Citado en *La Tercera*, 22 de junio de 1984, p. 5.

se hallan, además de Irak, Honduras, Guatemala, El Salvador, Egipto y Jordania.¹¹⁷

LOS VÍNCULOS CON LOS PAÍSES DE ASIA Y ÁFRICA

El acercamiento del gobierno militar chileno a los países del área Asia-Pacífico comenzó alrededor de 1975, estimulado por una heterogénea combinación de intereses geopolíticos, económicos y culturales-académicos. Esta apertura al Pacífico no ha sido del todo exitosa, como quedó demostrado en la frustrada visita del general Pinochet a Filipinas en 1981. Con todo, en 1984 las relaciones con países de Asia como China, Corea, Indonesia, Tailandia y Singapur eran activas y cordiales.

Los lazos diplomáticos con la República Popular China se han mantenido en un alto nivel debido, entre otros factores, a la actitud hostil que ambos gobiernos sustentan respecto a la URSS; al interés chino de llenar de alguna manera el espacio político dejado en Chile por Moscú a partir del 11 de septiembre de 1973; y al deseo de Pekín de impedir una activa presencia de Taiwán en el país.¹¹⁸

Los vínculos comerciales entre los dos países han sido activos. En agosto de 1983, visitó Santiago el Viceministro de Comercio Exterior de China, con el objeto de participar en la sexta comisión mixta chileno-china, oportunidad en que se analizaron las posibilidades de incrementar y diversificar el intercambio comercial, el estado de los medios de transporte, y la cooperación técnica.¹¹⁹ En noviembre del mismo año, viajó a China una misión integrada por representantes del gobierno y del sector privado, encabezada por el Vicepresidente de la CORFO, para adquirir materias primas y maquinarias.¹²⁰

Durante 1984, en agosto, una delegación oficial de Chile, liderada por el Subsecretario de Economía, visitó Pekín para asistir a la séptima sesión de la comisión mixta binacional. Casi un mes más tarde, el Subsecretario anunció en Santiago que se habían firmado acuerdos con China Popular para aumentar el comercio bilateral que en 1983 llegó a los 104 millones de dólares, de los cuales 94 millones correspondieron a exportaciones chilenas y sólo 10 millones a importaciones desde China. Desde Chile se exporta preferentemente cobre blister, celulosa, harina de pescado y rollizos de pino insigne, en tanto que

¹¹⁷ *Hoy*, Santiago, 10-20 de marzo de 1984, p. 15.

¹¹⁸ De hecho, los vínculos entre Chile y Taiwán subsisten fundamentalmente en el plano comercial. En mayo de 1984, visitó Santiago una delegación de 10 senadores taiwaneses, la más importante visita de la República de China a Chile en alrededor de una década (ver *La Tercera*, 16 de mayo de 1984, p. 11).

¹¹⁹ Ver *El Mercurio*, 22 de julio de 1983, p. C9 y *El Mercurio*, 13 de agosto de 1983, p. C9. El Viceministro chino se reunió personalmente con el general Pinochet.

¹²⁰ *La Segunda*, 23 de noviembre de 1983, p. 32. Esta misión también visitó Japón, Hong Kong y Corea.

China vende productos químicos y farmacéuticos, textiles, metales, elementos deportivos y vajilla.¹²¹

A fines de octubre, el canciller Del Valle realizó una visita oficial a la República Popular China, encabezando una comitiva integrada por dos representantes del sector empresarial chileno. En Pekín, Del Valle sostuvo conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores Wu Xue-quian, y fue recibido por el Primer Ministro Zhao Zi-yang. Durante esta visita se anunció que Chile compraría siete centrales hidroeléctricas a China, se intercambiaron notas con miras a la firma de un acuerdo marítimo con exenciones mutuas de aranceles, y concluyeron un convenio cultural de dos años de duración (1985-1986) que prevé el intercambio de estudiantes, artistas, y especialistas del campo televisivo.¹²² La gira del canciller chileno a China fue uno de los puntos más destacados en el balance de la gestión 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizado los primeros días de enero de 1985.¹²³ Curiosamente, la visita a China del canciller Del Valle estuvo precedida de una visita, auspiciada por el Instituto de Relaciones Internacionales de Pekín, del ex-canciller chileno Hernán Cubillos y del ex-ministro de Economía, Roberto Kelly, quienes habían visitado China en representación del gobierno militar en 1978 y 1979 respectivamente.¹²⁴

Con posterioridad al viaje del ministro Del Valle, se anunciaron diversas iniciativas bilaterales en el campo científico-tecnológico y comercial. En diciembre, durante una visita a Chile de una delegación china encabezada por el Vicepresidente de la Corporación de Inversiones Chinas en el Exterior, se informó de un convenio para la exportación de cobre a China Popular por 30 millones de dólares, de un programa para la transferencia mutua de tecnología, y de la posibilidad de inversiones conjuntas, tanto en China como en Chile. Posteriormente, se comunicó que a fines de enero de 1985, se discutiría a nivel oficial la posibilidad de suscribir un contrato para la compra de petróleo crudo chino por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).¹²⁵ Asimismo, a comienzos de enero de 1985, la cancillería de Chile anunció que un grupo de científicos observadores de China Popular habían viajado a la Antártica en la expedición del Instituto Antártico Chileno.¹²⁶

Los vínculos entre Chile y Corea del Sur también han sido bastante intensos, no sólo en los planos político y económico, sino, además, en el militar.

A fines de 1983, el canciller de Corea del Sur visitó Chile, entrevistándose

¹²¹ Ver *El Mercurio*, 15 de septiembre de 1984, p. C7 y *El Mercurio*, 1 de octubre de 1984, p. A7. Sobre las ventas de productos forestales a China, que en 1983 sumaron 31 millones de dólares, ver *El Mercurio*, 8 de julio de 1984, p. B1.

¹²² Ver *La Tercera*, 20 de octubre de 1984, p. 15 y *El Mercurio*, 27 de octubre de 1984, p. C1.

¹²³ Ver *El Mercurio*, 6 de enero de 1985, p. C3.

¹²⁴ Cubillos y Kelly, como ciudadanos privados, se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo con Huang Hua, ex-canciller y actual vicepresidente del Parlamento chino (ver *El Mercurio*, 8 de octubre de 1984, p. A9).

¹²⁵ Ver *La Tercera*, 24 de diciembre de 1984, p. 7; *El Mercurio*, 15 de diciembre de 1984, p. A1, y *El Mercurio*, 2 de enero de 1985, p. C1.

¹²⁶ Ver *El Mercurio*, 17 de enero de 1985, p. C7.

con las más altas autoridades chilenas. Durante su estadía de dos días, el canciller coreano firmó un convenio cultural para fomentar los intercambios artísticos, educativos y científicos, y sostuvo que "la lucha contra el comunismo es un punto básico en materia de política exterior en la que coinciden Chile y Corea".¹²⁷ A mediados de año llegó a Santiago, invitado oficialmente por el ejército chileno, el Jefe del Estado Mayor del ejército de Corea del Sur, quien en una entrevista con el general Pinochet destacó las coincidencias políticas entre ambos países y precisó que la "amenaza común" era la Unión Soviética.¹²⁸

A su vez, visitaron Corea en diversas ocasiones durante 1984, el comandante Humberto Julio, subsecretario de Relaciones Exteriores; el general Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno; y el general Julio Canessa, vicecomandante en jefe del Ejército de Chile, cuya visita a Seúl y otras ciudades coreanas se efectuó en diciembre de 1984.

Como en años anteriores, en 1984 las relaciones del gobierno chileno con países como Japón, Indonesia, Tailandia y Singapur fueron activas, pero restringidas fundamentalmente al plano económico-comercial. La realización de reuniones de comités empresariales binacionales fue un aspecto esencial de las relaciones de Chile con estos países; entre las visitas diplomáticas que más destacaron durante el período cabe mencionar: los viajes del comandante Julio a Japón, Corea, Tailandia, Singapur y Pakistán; la visita a Chile del Secretario General del ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático); la gira del general Fernando Matthei, miembro de la Junta de Gobierno, que incluyó Corea e Indonesia, y la visita oficial a Chile del Viceprimer Ministro de Tailandia.

Pese a la recesión económica internacional, el comercio de Chile con los países del Lejano Oriente ascendió, en 1984, a casi 1 000 millones de dólares. Las importaciones provenientes de Japón, cuyo punto máximo se alcanzó en 1981 (673 millones de dólares), declinaron fuertemente en los años siguientes, pero en 1984 se recuperaron llegando a los 300 millones de dólares; las exportaciones chilenas a Japón se estimaba alcanzarían los 450 millones de dólares, representando un aumento de un 30% respecto a 1983.¹²⁹

En contraste, las relaciones del gobierno chileno con los países de África siguieron siendo muy poco activas. En el pasado, el régimen militar ha cultivado la amistad de países como Zaire, Gabón y Kenya; sin embargo, los vínculos más estrechos los mantiene con la República de Sudáfrica, hecho que ciertamente obstaculiza relaciones más amistosas con el resto de África.

Los lazos económicos y militares entre Pretoria y Santiago han sido particularmente activos. A fines de 1983, se formó una sociedad conjunta chileno-sudafricana para la construcción de un nuevo astillero en la ciudad austral de

¹²⁷ Ver *El Mercurio*, 7 de diciembre de 1983, p. C7, y *El Mercurio*, 8 de diciembre de 1983, p. C3.

¹²⁸ Ver declaraciones en *El Mercurio*, 29 de mayo de 1984, p. C2.

¹²⁹ Ver *Business Latin America*, 9 de junio de 1985, p. 9.

Punta Arenas, con una inversión de 13 millones de dólares de la firma sudafricana Sandock Austral; en tanto que en 1984, se inauguró una nueva planta pesquera chileno-sudafricana en el puerto de Caldera. Según informaciones contenidas en un suplemento especial de doce páginas de *El Mercurio*, dedicado a Sudáfrica, entre 1982 y 1984, Pretoria invirtió cerca de 100 millones de dólares en Chile, transformándose así en uno de los principales inversionistas en el país.¹³⁰ El comercio bilateral, entretanto, aumentó en un 300% entre 1978 y comienzos de 1984; pese a que en el período 1980-1983 el comercio total chileno decayó en un 37%, el intercambio Chile-Sudáfrica creció en alrededor de un 57 por ciento.¹³¹

Durante 1983 y 1984, visitaron Chile el Comandante en Jefe de la Armada Sudafricana, el Comandante en Jefe del Ejército de Sudáfrica, y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del mismo país. A su vez, altas autoridades militares chilenas han viajado a Sudáfrica en los últimos años. Por último, pese a que no existe información exacta, se presume que Chile ha adquirido moderno equipo bélico directamente de Sudáfrica.

Finalmente, las relaciones de Chile con los países del Medio Oriente no han logrado afianzarse pese a los intentos del gobierno militar por reducir el distanciamiento político respecto a los países árabes, y estimular la inversión de esos países en Chile. Incluso en el caso de Egipto, que Chile ha privilegiado, como lo demuestran las visitas del canciller Schweitzer a fines de 1983, y del subsecretario Julio en octubre de 1984, los frutos de la relación bilateral han sido escasos. El propio embajador de Egipto en Chile sostuvo a mediados de 1984, que estaba "descontento" con los resultados del intercambio comercial que no supera los 20 millones de dólares, con una balanza ampliamente favorable a Chile.¹³² Por otra parte, la relación más activa que el gobierno chileno ha desplegado respecto a Israel, explicaría en parte el estancamiento que se observa en los vínculos diplomáticos y comerciales con los países árabes del Medio Oriente.

LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Hasta mediados de 1981, el gobierno chileno no pudo proyectar una imagen económica positiva en los círculos financieros-empresariales internacionales debido a los años de bonanza y aparente progreso, producto de un endeudamiento externo indiscriminado y la aplicación de políticas monetaristas. Pero, el crecimiento descontrolado de la deuda externa chilena, el colapso financiero de los principales grupos de empresas, la intervención del Estado en diversas entidades financieras y la liquidación de otras tantas, el aumento del desempleo,

¹³⁰ Ver "Suplemento: Sudáfrica, un país multifacético", *El Mercurio*, 1 de junio de 1984, p. 3.

¹³¹ Ver *La Tercera*, 31 de mayo de 1984, p. 14.

¹³² Ver declaraciones en *El Mercurio*, 22 de julio de 1984, p. C3.

y los múltiples cambios suscitados en la política cambiarla y en la conducción económica del país en 1982 y 1983, erosionaron precisamente la dimensión más sólida que podía exhibir el gobierno militar en sus relaciones internacionales: la imagen económica.

En 1984, Chile se vio entonces enfrentado no sólo a problemas políticos internacionales sino también a serios impedimentos económicos, tanto de origen interno como externo.

En el plano del comercio exterior, por ejemplo, se observó un deterioro importante en la balanza comercial del país respecto a 1983, debido a mayores importaciones que las programadas, a una "pobre evolución de las exportaciones no cupríferas" y al bajo precio del cobre. Según informaciones del Banco Central, el excedente de comercio exterior (diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones), para el período enero-noviembre de 1984, fue de 244 millones de dólares, comparado a un excedente de aproximadamente 1 009 millones de dólares registrado en 1983. Lo que es peor, el superávit oficial para 1984, que se proyectó en el programa negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue de 1 000 millones de dólares, por lo que el año 1984 terminó con una balanza comercial de alrededor de 700 millones de dólares menos de lo esperado.¹³³

Un informe de la CEPAL también destacó el "fuerte deterioro de los términos de intercambio comercial" que sufrió Chile en 1984, contrastando con una mejoría que registró la región en general a este respecto. De hecho, el superávit comercial de América Latina alcanzó la "extraordinaria cifra de 37 600 millones de dólares, lo que significa cuadruplicar lo registrado en 1982 y revertir la tendencia declinante que venían registrando las reservas internacionales desde 1981".¹³⁴ Lo anterior contribuyó a que el "poder de compra" de los países latinoamericanos experimentara, durante 1984, su primer incremento de importancia desde 1980. Sin embargo, Chile anotó un significativo deterioro en su poder de compra de bienes, del orden de -6.5 por ciento.¹³⁵

El comercio global de Chile, en todo caso, ascendió a 6 081 4 millones de dólares durante los primeros diez meses de 1984, representando un aumento de 7.6% respecto del mismo período de 1983. Pero los *embarques de exportación*, efectuados en el mismo lapso de 1984, sumaron 3 105 2 millones de dólares, lo que significó una disminución de 3.9% comparado con el mismo período de 1983 (3 229 5 millones de dólares).¹³⁶ Entre los diez principales socios co-

¹³³ Cifras del Banco Central de Chile en *El Mercurio*, 6 de enero de 1985, p. B1. Un estudio del Banco Industrial y de Comercio Exterior (BICE) también estimó que la balanza comercial de Chile terminaría con un superávit de 700 millones de dólares, inferior a lo oficialmente presuestado a inicios de 1984 (ver informe citado en *El Mercurio*, 20 de diciembre de 1984, p. B2).

¹³⁴ Informe de la CEPAL citado en *El Mercurio*, 28 de diciembre de 1984, p. B1.

¹³⁵ *Loc. cit.* Sobre este tema *El Mercurio* sentenciaba en un editorial: "El problema comercial es serio y la situación de reservas también, en especial si se consideran los endeudamientos de corto plazo en que ha incurrido el instituto emisor (Banco Central)" (ver "Superávit Comercial", *El Mercurio*, 8 de enero de 1985, p. A3).

¹³⁶ Ver Banco Central de Chile, *Indicadores de Comercio Exterior*, Santiago, octubre de 1984. Aquí se reflejó, nuevamente, la baja en los precios de los productos mineros.

merciales de Chile en 1984, destacaron Estados Unidos, Japón y la República Federal Alemana, respecto a los cuales se observó un incremento en el intercambio comercial.

Ante esta situación las autoridades han tratado de estimular el crecimiento de las exportaciones en coordinación con la cancillería, y se han llegado a plantear, por ejemplo, la posibilidad de reingresar al Pacto Andino. Así por lo menos lo sostuvo, en enero de 1984, el entonces ministro de Economía Andrés Passicot durante la reunión de Quito del Consejo Económico Latinoamericano, y su sucesor el ministro de Economía Modesto Collados, en el mes de junio, luego de concurrir a la conferencia cumbre sobre deuda externa realizada en Cartagena, Colombia.¹³⁷ El gobierno chileno; por otra parte, solicitó un procedimiento de consulta ante el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), para estudiar la eliminación de trabas no arancelarias impuestas por naciones de la Comunidad Económica Europea y otros países, que estarían afectando la exportación de ciertos productos chilenos a esos mercados.¹³⁸

De modo similar, luego de muchos años en los que el gobierno militar destimó la concertación económico-política con otros países productores en la defensa del cobre, en el último tiempo se ha observado un mayor compromiso real y búsqueda de apoyo en organismos como el CIPEC, y en foros interamericanos como la OEA. Esta nueva actitud se desarrolló tanto a partir de la crisis recesiva mundial que afectó negativamente los precios del cobre, como de las medidas solicitadas a comienzos de 1984, por once empresas mineras al gobierno norteamericano para limitar las exportaciones chilenas de cobre a Estados Unidos.

Así, en febrero de 1984 se constituyó una Comisión de Defensa del Cobre encabezada por el ex-embajador de Chile en Washington y ex-ministro de minería, Enrique Valenzuela, con el propósito expreso de enfrentar, primero, las denuncias contra el cobre chileno de las empresas cupríferas norteamericanas y, posteriormente, las recomendaciones adversas a Chile de la International Trade Commission de Estados Unidos. Más adelante, en junio, una reunión de la Comisión Especial de Consulta y Negociación de la OEA solicitada por Chile, con el apoyo de Perú, se solidarizó con la posición chilena criticando las presiones proteccionistas y recomendando que Reagan no adoptase medidas perjudiciales a las exportaciones de cobre chileno; cabe destacar que en dicha reunión respaldaron a Chile incluso países políticamente distantes del gobierno de Santiago, como Nicaragua, Bolivia y México.¹³⁹ Lo mismo ocurrió dos meses más tarde, en la XIX Conferencia Anual del Consejo Económico y Social de la OEA, realizada en Santiago, en la que se adoptó una resolución específica en apoyo a Chile.

¹³⁷ Ver declaraciones en *El Mercurio*, 14 de enero de 1984, p. B1, y *El Mercurio*, 26 de junio de 1984, pp. A1 y C6.

¹³⁸ La CEE en Ginebra aceptó el procedimiento de consulta mencionado, tras lo cual se iniciarían las conversaciones correspondientes (ver *El Mercurio*, 5 de enero de 1985, p. C1).

¹³⁹ Ver *El Mercurio*, 27 de junio de 1984, pp. A1 y C4.

En esta misma línea, la XX Conferencia del CIPEC, efectuada en Santiago a comienzos de septiembre, acordó intervenir directamente en el mercado internacional del cobre para regular el precio del metal, y enviar una carta al presidente Reagan recordándole los principios del libre mercado y solicitándole que no diera curso a las recomendaciones de la ITC tendientes a limitar las exportaciones de cobre chileno.¹⁴⁰

Fuera del comercio exterior, el otro gran tema que dominó la agenda económica internacional de Chile durante 1984 fue la deuda externa.

A fines de 1984, la deuda externa total de Chile llegó a la cifra récord de 20 172 millones de dólares, reflejando un incremento sustancial en relación con el año 1983 (ver cuadro 2).

Cuadro 2

Chile: deuda externa pública y privada desembolsada
(Millones de dólares)

	<i>Deuda pública total</i>	<i>Deuda privada sin garantía</i>	<i>Total deuda externa</i>
1978	4 356	1 567	6 664
1979	4 812	2 695	8 484
1980	4 720	4 693	11 084
1981	4 430	8 123	15 542
1982	5 171	8 644	17 153
1983	7 619	8 335	17 654
1984	—	—	20 172

Fuente: Cifras de distintos organismos financieros internacionales en *Datos estratégicos*, Santiago, Editorial Gestión, 1984, p. 8. Datos para 1984 tomados del informe de la Asociación Chilena de Seguridad (enero de 1985).

Como se sabe, el endeudamiento externo de Chile y de los países latinoamericanos en general, durante los años ochenta se registró preferentemente con la banca privada extranjera; de hecho, la deuda externa chilena respecto a los bancos privados era prácticamente insignificante en la década de los sesenta, pero en 1984 excedía los dos tercios del endeudamiento total.¹⁴¹ Esta situación se produjo, en gran medida, debido a la buena disposición de los

¹⁴⁰ Ver *La Tercera*, 5 de septiembre de 1984, p. 14. El 6 de septiembre de 1984 Reagan rechazó dichas recomendaciones. Sin embargo, es importante destacar que en la misma reunión del CIPEC en Santiago se aprobó una resolución perjudicial para el cobre chileno —relativa a las transacciones de cátodos de alta calidad y *wirebarbs* en la Bolsa de Metales de Londres—, presumiblemente debido a la exclusión de un representante de la empresa estatal del cobre, CODELCO, en la delegación chilena ante el CIPEC (ver *Informativo Minería y Desarrollo*, CESCO, vol. I, núm. 2, septiembre de 1984, p. 3).

¹⁴¹ Ver *Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina*, CEPAL, núm. 373, enero de 1983, p. 7.

bancos para financiar parte de los déficit de cuenta corriente de los países de la región a partir de 1974, en un contexto mundial de alta liquidez producto de una sobreabundancia de petrodólares. A su vez, quienes se endeudaron en Chile fueron fundamentalmente los agentes privados; de hecho, entre 1978 y 1981, los años en que la deuda creció en forma explosiva, la deuda externa pública subió sólo en un 9%, cifra inferior a la inflación mundial, en tanto la deuda privada creció un 315 por ciento.¹⁴²

Según un informe de la firma privada Géminis, en los años 1983 y 1984, en el proceso de renegociación de la deuda externa chilena, aconteció un drástico cambio en la composición del endeudamiento ya que, a diferencia de años anteriores, al finalizar 1984 “más del 60% de la deuda total era de responsabilidad directa o indirecta del sector público”. Dicho informe sostenía que la deuda privada a fines de 1982 representaba el 61.2% del total, en tanto que al cierre de 1984, ésta se había reducido al 37.2%. La situación se consideraba aún más grave puesto que este último porcentaje incluía la deuda de la banca privada intervenida por el Estado chileno, que muchos analistas dudaban de clasificar como “privada”. El mismo documento concluía que si de 1985 en adelante el Estado otorgaba las mismas garantías a la deuda privada que en renegociaciones anteriores, “prácticamente más del 80% de la deuda externa pasaría a ser de responsabilidad pública. Vale decir, la deuda estrictamente privada quedaría reducida solamente a los aproximadamente 3 400 millones de dólares que corresponden al sector no financiero”.¹⁴³

Cabe destacar que la mayor parte de la deuda externa de Chile correspondía en 1984 a obligaciones de mediano y largo plazo: a comienzos del año, por ejemplo, excluidos los compromisos del Banco Central con el FMI, 14 832 millones de dólares correspondían a obligaciones de mediano y largo plazo, mientras que las de corto plazo llegaban a 2 599 millones de dólares.¹⁴⁴ Por otra parte, los datos sobre la deuda externa chilena no son totalmente claros, puesto que existirían préstamos no documentados (*indocumented loans*) para fines que se ignoran —como indica un informe de abril de 1984, de la embajada de Estados Unidos en Santiago— que harían subir aún más la deuda externa total registrada en años recientes.¹⁴⁵

Evidentemente, el pago de la deuda externa es el grave problema que ha enfrentado Chile en los últimos dos años. En 1984, sólo el pago de los *intereses* (sobre 2.200 millones de dólares para 1985) representaba cerca del 10% del producto nacional y más de la mitad del valor total de las exportaciones del país.¹⁴⁶ A fines de 1984, el programa de pago de las amortizaciones (ver cua-

¹⁴² Ver datos en *La Segunda*, 26 de diciembre de 1984, p. 6.

¹⁴³ Informe Géminis citado en *El Mercurio*, 16 de diciembre de 1984, p. B1.

¹⁴⁴ Cifras del Banco Central de Chile en *El Mercurio*, 24 de octubre de 1984, p. B1.

¹⁴⁵ Ver United States Embassy-Santiago, *Chile: Economic Trends Report*, abril de 1984, pp. 2 y 15.

¹⁴⁶ Datos de la Asociación Chilena de Seguridad, en *La Tercera*, 7 de enero de 1985, p. 8. En 1975, Chile pagaba 214 millones de dólares en intereses, equivalentes al 13% de las exportaciones totales del país (ver *La Segunda*, 26 de diciembre de 1984, p. 6).

Cuadro 3

Deuda externa chilena: programa de amortizaciones
(Millones de dólares)

	<i>Sector privado</i>	<i>Sector público</i>	<i>Total</i>
1984	385	288	673
1985	1 588	642	2 230
1986	1 783	903	2 686
1987	1 356	979	2 335
1988	1 593	1 474	3 066
1989	1 078	1 362	2 440
1990	780	999	1 779
1991	203	362	565
1992	8	166	174

Fuente: Recopilado con base en datos del *Business Latin America*, 21 de noviembre de 1984, p. 375.

dro 3) resultaba imposible de cumplir y, por lo tanto, se hacía imperativa una renegociación del mismo.

Una publicación internacional especializada sostenía, en octubre de 1984, respecto a la deuda chilena que no tenía “una solución aritmética bajo ninguno de los enfoques que se han desarrollado”.¹⁴⁷ A su vez, la sección “Economía y Negocios” de *El Mercurio*, coincidía con este diagnóstico y sostenía: “A la luz de la situación actual (precio y volumen de las exportaciones e importaciones y tasas de interés), sin duda la afirmación es correcta. La aritmética, sigue siendo precisa, concisa e indesmentible. Nuestra situación, entonces, es la de un deudor insolvente enfrentado a un numeroso conjunto de acreedores”.¹⁴⁸

Ante esto, las autoridades chilenas y los expertos han barajado diversas soluciones técnicas, desde fórmulas que no impliquen pago alguno hasta 1991, para poder crecer y financiar el desarrollo,¹⁴⁹ hasta una propuesta del Director de Presupuestos de Chile de extender el pago de la deuda a 25 años plazo, con un endeudamiento adicional de 4 500 millones de dólares en tres años, para crecer a tasas del 5% anual.¹⁵⁰

Sin embargo, la actitud más inesperada que ha asumido el gobierno frente al problema ha sido renegociar¹⁵¹ sobre la base de que la deuda externa es

¹⁴⁷ Análisis del *International Reports*, citado en *El Mercurio*, 17 de octubre de 1984, pp. B1 y B2.

¹⁴⁸ Ver “Economía y negocios: perspectivas”, *El Mercurio*, 21 de octubre de 1984, p. B1.

¹⁴⁹ Ver proposición del economista Carlos Massad en *El Mercurio*, 10 de noviembre de 1984, p. B1.

¹⁵⁰ Ver planteamientos de Luis A. Fuenzalida, Director de Presupuestos, en *El Mercurio*, 17 de noviembre de 1984, p. B1.

¹⁵¹ La renegociación de la deuda se ha efectuado con la asesoría del Comité de 12 bancos que son, justamente, los principales acreedores de Chile. A fines de octubre de 1984, se informó que el gobierno chileno pretendía contratar los servicios del First Boston Corporation, para asesorar dicha renegociación (ver *El Mercurio*, 25 de octubre de 1984, p. B2).

un problema *político* que requiere soluciones políticas. A principios de año la posición chilena, expresada por el entonces Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, respecto a la deuda externa era que cada país constituía un “caso diferente y cada uno [debía] tomar sus propias decisiones”,¹⁵² desestimando la proposición argentina en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, en Punta del Este, de “regionalizar” el manejo del problema de la deuda.

Pero, ya en el mes de marzo, se percibía un cambio en la postura chilena sobre la materia. Así, en una reunión sostenida entre el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el general Pinochet, este último expresó su interés por las alternativas que estaba proponiendo el organismo regional, en el sentido de adoptar una posición común o solidaria en el pago de la deuda externa.¹⁵³ Luego, en junio, los Ministros de Economía y Relaciones Exteriores de Chile, sostuvieron en la Conferencia Ministerial de Cartagena, Colombia, que Chile no podía seguir destinando una porción tan elevada de sus ingresos de exportaciones al pago de intereses de la deuda, y que Chile participaba del consenso de los deudores, en el sentido de avanzar a una “conversación con los acreedores”.¹⁵⁴ El planteamiento que proponía que los gobiernos de los países acreedores debían participar en la búsqueda de soluciones al dilema de la deuda fue reiterado por el nuevo titular de Hacienda, Luis Escobar, en septiembre, durante una reunión de Cámaras de Comercio e Industrias en Miami, ocasión en que señaló específicamente que la seriedad del problema de la deuda exigía la “intervención política del gobierno de Estados Unidos”.¹⁵⁵ Por último, después de concurrir a la reunión en Mar del Plata, Argentina, del Grupo de Cartagena, Chile comprometió su asistencia al tercer encuentro del Grupo en Santo Domingo, en febrero de 1985, guiado por el “convencimiento de que la gravedad y magnitud del problema que afecta a los países deudores requiere de una *solución política*”.¹⁵⁶

Entretanto, el gobierno chileno continuó recibiendo, durante 1983 y 1984, préstamos del FMI mediante un convenio que venció en enero de 1985. La negociación de un nuevo convenio consistente, posiblemente, en un nuevo crédito *stand-by* a uno o dos años y un préstamo de “facilidad ampliada” a tres años, sujetos a diversas condiciones impuestas por el Fondo, se estimaba fundamental para los objetivos de crecimiento (4% anual) fijados por el gobierno para 1985, y, además, para la obtención de créditos adicionales de la banca acreedora. Por otra parte, las reservas internacionales del Banco Central declinaron en 57 millones de dólares en los primeros once meses de 1984, déficit que, considerando el endeudamiento externo de corto plazo del Banco Central, ascendía en términos netos a 307 millones de dólares, lo que significaba

¹⁵² Citado en *El Mercurio*, 29 de marzo de 1984, p. A1.

¹⁵³ Ver *La Tercera*, 28 de marzo de 1984, p. 15.

¹⁵⁴ Ver *El Mercurio*, 21 de junio de 1984, p. A1, y *La Tercera*, 26 de junio de 1984, p. 14.

¹⁵⁵ Citado en *El Mercurio*, 9 de septiembre de 1984, p. A1.

¹⁵⁶ Declaraciones de la cancillería chilena citadas en *El Mercurio*, 15 de noviembre de 1984, pp. C1 y C2.

un deterioro muy superior al contemplado en el programa *stand-by* entonces vigente con el FMI.¹⁵⁷

Un último punto de las relaciones económicas internacionales de Chile, la inversión extranjera, tampoco mostraba signos positivos a fines de 1984. En efecto, la inversión "aprobada" como realmente "materializada" sufrió un fuerte descenso en 1984, en relación con 1983. Según el Comité de Inversiones Extranjeras, la inversión autorizada cayó en un 79%, mientras la materializada declinó en un 53%.¹⁵⁸ Cabe destacar que la inversión externa autorizada en el período 1973-1983 alcanzó a casi 7 300 millones de dólares, de los cuales ingresaron efectivamente al país sólo alrededor de 2 000 millones.¹⁵⁹

NOTA DE CONCLUSIÓN

La persistencia de un estado de crisis en la política exterior chilena en 1984 se debió, fundamentalmente, a la agudización de las medidas autoritarias internas y a la carencia de avances significativos hacia un orden democrático. La reacción crítica de la comunidad internacional frente a esta situación fue uno de los principales problemas que debió enfrentar la cancillería durante todo el año en cuestión. Por otra parte, la profundización de las graves dificultades en las relaciones económicas externas del país conformaban un cuadro general aún más difícil de resolver.

Al menos, el período se cerró con el hecho positivo de la firma e inminente ratificación del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Lamentablemente, es muy probable que en 1985 no llegue a producirse un alivio semejante para los padecimientos de la política exterior chilena.

¹⁵⁷ Ver "Situación de reservas", *El Mercurio*, 7 de enero de 1985, p. A3.

¹⁵⁸ Datos citados en *La Tercera*, 30 de diciembre de 1984, p. 7.

¹⁵⁹ Banco Central de Chile, *Aspectos relevantes de la inversión extranjera en Chile*, Santiago, octubre de 1984, p. 16.